

RA-21

así se

ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES
Guatemala

**Centroamérica,
Panamá y México
Julio-Agosto, 1988**

EXTRAORDINARIO

3
1988



EDITOR

Asociación de Investigación
y Estudios Sociales (ASIES)
Apdo. Postal 1,005 A
Ciudad de Guatemala
Guatemala, C.A.

COORDINACION

Miguel Angel Balcárcel Jaeger

DISEÑO GRAFICO

Manuel Corleto

PORTADA

Ramón Avila

IMPRESION

Editorial Piedra Santa

ASIES,

Publicación registrada en la
Dirección General de Correos
de Guatemala,
como correspondencia de 2a. clase
bajo el número 2660

EDITORIAL

La situación centroamericana ofrece un cuadro de gran movilidad política en el que intervienen factores de estructura así como coyunturales, que obligan a mantener una observación constante y una verificación sistemática de la información y, sobre todo, un proceso analítico fluido que ofrezca la posibilidad de conocer las condiciones situacionales que, en un momento dado, son determinantes en las decisiones del poder político y que permitan, a la vez, realizar proyecciones lógicas de la conducta política de los actores como totalidad social en el futuro inmediato.

Partiendo de tales criterios, ASIES trata de rutinizar la observación del comportamiento de los protagonistas políticos e integrar una visión objetiva de los hechos que determinan la vida nacional centroamericana. La característica fluidez de las variables política, económica y social, hace imperativo advertir que el análisis a nivel subregional, está sujeto a revisión constante y, por eso, se considera siempre preliminar, como el que ahora ofrecemos.

La idea que predomina en ASIES es ofrecer esta clase de estudios para servir a quienes se preocupan por el destino de Centro América, cualesquiera que sean sus motivaciones o, en última instancia, para que esté a disposición como recurso informativo en los procesos de reflexión y estudio de académicos y público en general.

EDITORIAL

The situation in Central America paints a picture of great political mobility in which both structural and circumstantial elements intervene, forcing constant observation and systematic follow-up of information; but most of all, a fluent analytical process, in order to make it possible to have first-hand knowledge of conditions prevailing at certain times, is essential for political decision-making and should at the same time enable one to make logical forecasts of the political behavior of those involved as a social whole in the immediate future.

Using the above criteria as a starting point, ASIES tries to maintain a routine observation of the behaviour of the political actors in the area, and obtain an objective view-point of the underlying facts in the lives of the Central Americans. The changing nature of political, social and economic variables makes it necessary to note that analysis at the regional level is subject to permanent review and therefore, is always considered to be preliminary, as the one presented herein.

ASIES' basic motivation in producing this kind of studies is to help those who are concerned about Central América's future, whatever their reasons may be, at least, to have them on hand as an informative resource for their academic and political reflection or study, as well as for use by the general public.

José Luis Cruz Salazar(*)

CENTROAMERICA, PANAMA Y MEXICO

Julio-Agosto, 1988

SUMARIO

La movilidad política centroamericana está en armonía con los cambios que han ocurrido en los sistemas políticos de gobierno a partir de 1979 y los procesos que se han originado en cada uno de los países; indudablemente, se proyectan en múltiples formas a los otros que conforman la subregión. En consonancia con esta realidad, se ha examinado la condición situacional en cada país, y para una lectura rápida, se resume de la forma siguiente el contenido del estudio realizado que seguirá a continuación.

En Guatemala, el Gobierno es epicentro de una acción múltiple de oposición de todos los sectores: organizaciones populares, partidos políticos y organizaciones patronales.

Esto se explica en función del salto cualitativo político que se ha dado en el país a partir de 1986 y su contradicción con la rigidez de las

estructuras social y económica, que no han sufrido cambio. En todo este marco de la situación guatemalteca no puede desestimarse la centralización administrativa, que no contribuye a flexibilizar los cambios, a la vez que se evidencia la aplicación de un pragmatismo muy peculiar que se manifiesta con tratar de resolver los problemas a medida que salen a la superficie, sin apego a un programa o plataforma de realizaciones sociales y económicas.

El proceso de neutralidad activa se ha mantenido en relación al conflicto global centroamericano, pero es evidente que no es una política que satisfaga a algunos gobiernos de la subregión, sin embargo, como comportamiento en el contexto centroamericano, ha permitido cierta agilidad de acción al Gobierno guatemalteco.

Aún cuando se ha dado formal cumplimiento a los requerimientos acordados en Esquipulas II, el Gobierno no ha intentado un acerca-

(*) Político, especializado en sociología política en el grado de Licenciado.

miento serio con la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala (ÚRNG), que actúa como vanguardia política de la guerrilla guatemalteca, que ha estado activa por cerca de veintisiete años, para buscar un cese de fuego y llegar a conversaciones que conduzcan a finiquitar el interminable enfrentamiento bélico.

En los diferentes análisis realizados por ASIES respecto de la política en Centroamérica, se ha ido estructurando la tesis de que Nicaragua es el centro alrededor del cual giran los acontecimientos en el área.

Este presupuesto se confirma por el hecho de que la intensidad de los conflictos solamente disminuyó por el esfuerzo realizado para encontrar una salida al problema con la "contra", sin embargo, cualquier agudización del antagonismo con los Estados Unidos puede hacer total el fracaso de los mejores resultados de las conversaciones de Sapoá y Managua.

Ninguna de las partes podría culparse de no lograr su propósito en el intento pacifista de Sapoá, en algunos aspectos las posiciones se han hecho irreconciliables. En este contexto, hay diez y seis puntos de divergencia, pero las cuestiones de mayor aspereza radican:

1. La exigencia del gobierno de un cese de fuego inmediato y definitivo y reintegro de los rebeldes a la vida civil y política del país. La Resistencia exige previamente un *modus operandi* para el cese del fuego.
2. El contenido conceptual de la democratización no parece tener una interpretación común.

En tanto que la Resistencia

exige una reforma constitucional de diez y siete puntos y la separación de la trilogía gobierno-partido-ejército, el Gobierno, sin considerar esa petición, ofrece plenas garantías civiles y políticas bajo el amparo de una amplia amnistía.

Otras diferencias están dentro del proceso de cese del fuego, referentes al control de los enclaves: funcionamiento, seguridad y potestad de jurisdicción.

En el marco del complejo contexto centroamericano, los acontecimientos se producen con extraordinaria dinámica, al interior de otros países de la subregión, como en el caso de El Salvador.

En efecto, la posible pérdida de control del gobierno por parte del Presidente Duarte en El Salvador, las complicaciones sufridas por el Partido Democracia Cristiana, la participación de la izquierda como frente interno en el país, expresada a través de la Convergencia Democrática, la aparente transformación del Ejército en lo que concierne una nueva visión del país y de la guerra que desde hace años viene combatiendo, los criterios encontrados respecto del Debate Nacional convocado por el Arzobispo de San Salvador, los movimientos que se producen al interior de los partidos políticos, inciden, inobjetablemente, en el proceso global de pacificación regional, aún cuando el Gobierno Salvadoreño reiteradamente señala que apoya cualquier gestión que por la vía de la negociación conduzca a la paz en el área, respetando los acuerdos de Esquipulas II.

En Honduras, el cumplimiento del

Acuerdo de Esquipulas II en cuanto al no uso del territorio para agredir a otros estados, no se da debido a la presencia de las bases norteamericanas en el Atlántico y de la Resistencia Nicaragüense en territorio hondureño. Estos problemas no parecen resolverse y la propuesta nicaragüense de una fuerza internacional que controle la frontera entre ambos estados, ha sido recibida bien, pero sujeta a que Nicaragua retire la demanda que tiene contra Honduras en la Corte Internacional de Justicia por la ayuda a los "contras".

En Costa Rica, la ratificación del Parlamento Centroamericano está pendiente, porque los dos partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa, rechazan la celebración de una elección de parlamento poco antes de las elecciones presidenciales de 1989, aunque en reunión subregional de fecha reciente, públicamente manifestaron su voluntad de hacerlo.

Finalmente, es preciso acotar algunas apreciaciones de la situación en Panamá y la política de México hacia Centroamérica.

En Panamá se plantea una nueva fase de la presencia militar con la creación del Consejo Estratégico Militar, que permite apreciar la posibilidad de establecer una nueva forma de dominación bajo el mando del General Noriega. En ese esquema, se presenta un sistema de represión muy refinado, que permite al actual gobierno consolidar sus posiciones, y controlar cualquier intento opositor. A ello se suma el respaldo de los partidos políticos que actúan bajo UNADE^{1/}, de centrales obreras, de

CONATO^{2/}, y el respaldo de las Fuerzas de Defensa de Panamá.

La oposición política carece de liderazgo y es prácticamente inorgánica. Asimismo, las diversas propuestas de mediación para resolver el diferendo USA-Panamá han resultado inoperantes y el problema panameño se presenta como un factor más de desestabilización en el área.

La tendencia observada en el sistema financiero era la de un mayor deterioro. El principal efecto de la crisis bancaria ha sido la suspensión de la intermediación financiera.

El daño provocado por la crisis política y el boicót norteamericano, ha repercutido seriamente sobre la calidad de vida de la población. El desempleo, subempleo y el aumento del sector informal son pruebas de la condición de miseria que lleva al pueblo panameño a la desesperación.

El examen de la política exterior mexicana hacia Centroamérica, conduce a reflexionar sobre la tendencia de México a buscar una forma colectiva de influencia en América Central, antes que empeñarse en una política propia que pueda confrontarse con la posición de influencia de Estados Unidos en el área. Eso explica el interés mexicano por mantener vivo al Grupo de Contadora^{3/} y estimular la acción del Grupo de los Ocho^{4/} en cuanto al problema centroamericano.

- 1/ UNADE: Unión Nacional Democrática
- 2/ CONATO: Coordinadora Nacional de Trabajadores
- 3/ Grupo de Contadora: México, Venezuela, Panamá and Colombia
- 4/ Grupo de los Ocho: México, Venezuela, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Uruguay



De todas maneras, la intención expresada por el próximo presidente, Salinas de Gortari, es poner énfasis en las relaciones con Centroamérica y, muy especialmente, con Guatemala, pero, en todo caso, deberá escoger entre la política de apoyo a la izquierda institucional que se dio de 1978 a 1983 o seguir la política de mediación que se inició en 1983, bajo los auspicios de Contadora, o en última instancia, simplemente dejar hacer, como ocurre después de la eliminación de la Comisión de Verificación y Seguimiento el 16 de enero de este año, en Alajuela, Costa Rica.

Análisis en detalle a continuación:

GUATEMALA

El Gobierno del licenciado Vinicio Cerezo Arévalo es, por hoy, un gobierno bajo acoso político. La concurrencia de exigencias que vienen de las más diversas instituciones o agrupaciones, le hace el epicentro de una presión continua y progresiva, que le ha puesto a la defensiva.

La respuesta se da en el ejercicio de una política pragmática que enfrenta los problemas según se presentan en los niveles político, social y económico, perdiendo el sentido de la totalidad social. Dentro de esa tendencia, lo que se resuelve en armonía con un sector social, productivo o político, provoca reacciones opuestas o de descontento en otros sectores.

Es evidente que la complejidad situacional es el efecto de un salto cualitativo en la estructura política que se dio a partir 1986 y que no ha

sido coincidente con la tradicional rigidez de las estructuras económico-sociales, que no han podido realizar el mismo estado de cambio.

Salto cualitativo significa organización, en la base popular; exigencia reivindicativa, en el plano del trabajo urbano y rural; oposición económicamente interesada de grupos de presión a los intentos de reforma a la estructura económica, especialmente en lo fiscal; comportamiento crítico del liderazgo político de oposición institucional que en sí no presenta alguna orientación doctrinaria específica, fuera de montar escenarios y casuísticas en una perspectiva política de elección presidencial futura; exigencias en el campo de los derechos humanos; presiones en el contexto de una iniciativa estratégica de la vanguardia política de la guerrilla, proponiendo diálogo político y, finalmente, la intentona de golpe de estado el 11 de mayo pasado, por oficiales de rango medio en el Ejército y sus consecuencias políticas posteriores a nivel militar y político.

¿Cómo se manifiestan esas presiones?

Las organizaciones populares

El salto cualitativo político que reconocemos como evidente, permitió, en primer término, como era de esperarse, el surgimiento de organizaciones populares de carácter reivindicativo y competitivas, que se abren espacios antes prohibidos que van a traducirse en exigencias 1) para ganar reconocimiento entre la masa trabajadora, y 2) para la conquista de reivindicaciones que van desde el control de precios y

aumento de salarios, hasta facilidades de transporte público, atención sanitaria, educación y muchas otras que son concordantes con el estado de atraso en lo social y económico que vive el país.

Movimiento sindical

A pesar de la afirmación oficial de que existen 650 sindicatos inscritos en el país, en el escenario de las reivindicaciones y de la actividad política aparecen mucho menos, la mayoría están afiliados a federaciones obreras activas en obediencia al imperativo actual de control y unidad orgánica en el campo de las organizaciones laborales.

A pesar de la competencia entre las federaciones obreras, se ha procurado converger a una acción unitaria que dé fuerza a la lucha reivindicativa. Pero esa unidad no se ha logrado aun cuando se han planteado dos opciones: la primera, en la Coordinadora Sindical Unitaria (COSU) que no ha logrado mayores afiliaciones, pero no ha desaparecido; y luego, en la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) que ha conseguido una clientela, entre otros, la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), la Unidad Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), la Federación de Empleados Bancarios (FESEBS) y la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado (FESTEG). En tanto que la COSU cuenta sólo con la Central de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y la Federación Central de Trabajadores (FEDETRAG). Hay otras federaciones que no se han afiliado a ninguna de las formaciones de sentido

unitario y existen sindicatos no federados que coyunturalmente prestan su apoyo a la UASP.

Según el último planteamiento de la UASP al Gobierno, se evidencia que hay una estrategia muy inclinada a la presión política más que al estricto sentido de reivindicación social y económico. Los cinco puntos presentados al Gobierno, tienen matices un poco apartados de la pura acción laboral, lo que unido al rechazo al llamado del Presidente Cerezo para un "encuentro" de carácter nacional, refuerza esta apreciación de la estrategia de la UASP, además de la notoria acción dirigida exclusivamente en contra del Gobierno, marginando toda presión al sector empresarial seguramente porque frente a la situación de crisis económica que sufre el país, esta estrategia política ofrece mejor oportunidad de consolidar el movimiento obrero y prepararlo luego para luchas futuras.

En resumen, el movimiento obrero nacional está frente a una perspectiva de desarrollo y aun cuando las corrientes internas de confrontación ideológica siguen vigentes, se ve muy claramente el progreso alcanzado a partir del cambio cualitativo político iniciado en 1986.

El movimiento laboral desconfía del gobierno, bajo el supuesto de que es un gobierno que orienta su gestión a satisfacer los intereses tradicionales de la élite económica. Se acusa a la administración de obstaculizar deliberadamente la organización gremial.

En ningún sector se manifiesta tan fuertemente la contradicción entre el salto cualitativo político y la



rigidez en lo social y lo económico, como en éste. En tal contexto, la presión sobre el gobierno es permanente y crece en agresividad. El Ejecutivo no tiene, aparentemente, una respuesta a la exigencia y presión laboral.

El movimiento campesino

En el campo, la preocupación primordial es la posesión de la tierra. Los grupos de campesinos organizados, o que se organizan, siguen a líderes improvisados que responden a la necesidad de parcelas para sembrar. El sacerdote Andrés Girón sólo es uno de esos líderes; pero está muy claro que de alguna manera, son intérpretes de la preocupación del campesino. Por ahora es la tierra y su adquisición el objetivo primordial, pero una vez la organización en el campo se vaya formalizando, puede esperarse una presión mucho más vigorosa en razón de otras reivindicaciones, así como el abandono del liderazgo paternalista.

El gobierno no puede superar la restricción constitucional en cuanto a la posibilidad de una reforma agraria. La Ley fundamental, explícitamente prohíbe la expropiación de tierras, sin el previo reconocimiento de su valor en moneda corriente. Así se explica que las pocas parcelas que se han dado para ser distribuidas entre los campesinos, hayan sido previamente compradas a los precios de mercado.

La élite de poder

La oligarquía económica, financiera y agro-exportadora, definida en términos de dominación, protege

sus intereses a través de una acción finamente cohesionada, que se perfecciona con mucha sutileza.

"El crecimiento y la calidad de la élite de poder se manifiesta en una multiplicidad de grupos de interés que se unifican, comúnmente para actuar armónicamente (las cámaras y la asociación unitaria el CACIF), conformando un centro de acción política que se manifiesta con fuerte influencia en las decisiones del poder público, en detrimento, generalmente, del equilibrio social cuando se trata de la representatividad de otros intereses menos poderosos, pero necesarios para la convivencia social y política en la nación" (Cruz Salazar, 1985).

La consolidación ideológica de la élite de poder se realiza mediante la coordinación programada, cuya manifestación más obvia se observa en eventos públicos organizados por los diferentes sectores de su estructura orgánica, por las expresiones a través de los medios de comunicación social o en la formación de afiliaciones y liderazgo que se produce en la casa de estudios superiores donde se modela la mentalidad neoliberal del país.

La élite de poder ha puesto a prueba una nueva capacidad de convocatoria, a propósito de las medidas fiscales tomadas por el gobierno en cuanto al autoavalúo de la propiedad inmobiliaria y el impuesto sobre la renta. En esta ocasión, la Coordinadora de las Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), promovió un paro nacional de la producción, acudiendo al sofisma político-económico de considerar a todo productor o co-

merciante, incluyendo a los buhoneros, como sujetos de la empresa privada. El sofisma fue efectivo y la capacidad de convocatoria de la élite, amplió su base. En esos términos define la élite de poder su presencia en la conducción social del país.

Los partidos políticos de oposición

"Los partidos políticos pueden ser cuestionados sobre sus preceptos ideológicos y que ninguno ha podido trascender la orientación egoísta de sus orígenes, aunque haya casos de falsa ideología que dentro de un marco irracional, explota contenidos emocionales para generar adhesiones en función del estímulo de valores morales, religiosos o éticos, cuestionables, en oposición a ideologías reales y bien conformadas que se pretenden como amenaza al sistema imperante. Otros se aferran por contagio a formas ideológicas probadas en otras latitudes; pero su comportamiento no logra rebasar el carácter intrínseco que les es propio, usando la ideología solamente como simple carta de presentación sin que trascienda a afiliados y clientela y queda, entonces, como elemento de lucha exclusivo de los círculos íntimos de dirección". (Cruz Salazar, 1985). Sin metas bien definidas, parece que la función de estas instituciones de derecho público, está concentrada en estimular individualismos que puedan en el momento propicio, aparecer como figuras presidenciales.

Los partidos que ya están definidos en cuanto a quien deba llevarlos a la campaña presidencial, permiten que esta figura sea el centro de ex-

presión y acción política partidista. Esto lleva implícito el hecho de que para el líder, lo que importa es permanecer en el escenario nacional y el mejor medio es someter a crítica cualquier acción o intención gubernamental. Los partidos que no tienen una figura sobresaliente para enfrentar el reto de una elección presidencial, barajan nombres, sin preocuparse de la formulación de una plataforma política, de la organización de cuadros, ni de substanciar metas doctrinarias o ideológicas.

Este cuadro de los partidos políticos de oposición, puede explicar por qué ninguno de ellos defendió públicamente el régimen institucional en ocasión de la intentona de golpe de estado el 11 de mayo del corriente año. En todo caso, su actitud tuvo visos de complicidad, jugándose la carta de un cambio de gobierno y como corolario, la posibilidad de una elección presidencial inmediata.

Las Fuerzas Armadas

No obstante las aparentes diferencias que se observan entre la conducción del Ejército y la oficialidad de medio y bajo rango, las Fuerzas Armadas prosiguen su propio proyecto político y dentro de éste, se procesa un concepto propio de la seguridad nacional. El Ministro de la Defensa Nacional, General Héctor Gramajo, dijo en su discurso del 30.6.88 que el Ejército ha abandonado "...los estereotipos extranjeros de la infabilidad de la doctrina de la seguridad nacional ... entendida ésta como un proceso de fuerza". Más adelante afirma que, "la seguridad nacional debe alcanzarse a través de

la estabilidad nacional", que se basa, según él, "en lograr el equilibrio de los grandes campos de poder nacional... el económico, el político, el psicosocial y el militar, enmarcados en la geografía nacional".

Según un documento del Estado Mayor de la Defensa Nacional, la Tesis de la Estabilidad Nacional es el lineamiento doctrinario "que hará factible la realización de este proyecto nuestro en esta tercera oportunidad que tenemos de lograr la concordia y el progreso de Guatemala, dentro del marco del sistema político democrático que el pueblo ha escogido". Del concepto de estabilidad "se originan los sentimientos de seguridad y bien común" y "la defensa nacional es el medio para lograr la seguridad nacional".

En el mismo documento se dice que la idea de la defensa nacional "se limitó originalmente a actividades militares, creció y evolucionó paralelamente y dio paso a un concepto más amplio, acorde con la estrategia de la época actual, dando paso a la seguridad nacional". El presupuesto del Ejército es que el Estado debe mantener la seguridad, pero, dice: "lo fundamental es que los integrantes del aparato del Gobierno, estén en disposición de colaborar con el mantenimiento de las regulaciones, procedimientos, normas y coordinación de los organismos de seguridad del Estado, a fin de minimizar la serie de antagonismos y presiones existentes interna y externamente". Esta última parte del documento citado, define la intención del proyecto político militar y esto podría explicar los cambios recientes en los mandos de seguridad.

Por otra parte, el Ejército, dentro del papel de acomodo al experimento democrático, dice el Ministro Gramajo que: "... no debe pelear las batallas económicas de ningún sector en este país, ... que no debe pelear batallas políticas de ningún partido (ni de gobierno ni de oposición)" y que es oportuno también aconsejar "a los grupos radicales ultraconservadores, que se quiten la telaraña conceptual que no les permite actualizar su pensamiento a la normal evolución de las sociedades civilizadas".

Es indudable que la cúpula de mando de las Fuerzas Armadas sigue una línea de reacomodo con el proceso de democratización; pero, no parece que la misma percepción del cambio político sea compartido en todos los rangos de la oficialidad. Aunque en este caso es indispensable meditar sobre la influencia intencionada del conservatismo extremo nacional, que vería con agrado un cambio de gobierno y por ende, un cambio en la orientación hacia la democracia.

Del golpe frustrado del 11 de mayo, quedan todavía muchas interrogantes. Entre otras, cuál fue, en realidad, la amplitud de una intentona que, de acuerdo con el criterio oficial, estuvo limitada a unos cuantos oficiales y civiles.

Pero nada se dijo de los comandantes de base de donde salieron los oficiales con todos sus efectivos, ni que otras complicaciones hubo en otras zonas militares. Tampoco se aclararon cuales fueron las condiciones aceptadas por el gobierno para terminar tan rápida y exitosamente con la intentona.

De todas maneras, la cuestión militar pudo también estar motivada 1) por el nuevo protagonismo del Partido Guatemalteco del Trabajo y por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), exigiendo un diálogo al gobierno para terminar con la guerra, o 2) por la supuesta militancia política de la cúpula militar, y 3) por la influencia del conservatismo político extremo que explota esas dos posibilidades en la mente de los rangos menores e intermedios del ejército.

La guerrilla

La vanguardia política de la guerrilla, la URNG, lo mismo que la dirección del Partido Comunista PGT, realizan una ofensiva, evidente en el plano nacional e internacional, exigiendo al gobierno con base en los Acuerdos de Esquipulas II la realización de conversaciones para terminar con la confrontación armada.

Dentro de ese contexto, la URNG que reclama 3500 hombres en armas, se reunió el 23.8.88 con la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) en San José, Costa Rica, con el fin de plantear la urgencia de un diálogo con el Gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo y así buscar una solución política y negociada al conflicto armado que aflige a Guatemala por más de 25 años.

La CNR prestó su concurso como intermediaria, pero hizo saber que su papel se reduce a transmitir al Gobierno los planteamientos de la URNG. No parece, según expresa uno de los miembros de la CNR, que haya nada nuevo en los argumentos presentados por la URNG; pero son evidentes dos cuestiones básicas:

1) que la URNG está firme en su estrategia política de presionar al Gobierno y al Ejército, exigiendo un diálogo que a la vez le permite tomar la iniciativa en el campo de la opinión internacional, iniciativa que perdió desde el ascenso al poder de Cerezo Arévalo. Esto explica que la dirigencia presente en San José, Miguel Sandoval, Luis Becker, Francisco Villagrán, Héctor Nuila y Pablo Monsanto (Jorge Soto), se haya entrevistado con el Presidente de Costa Rica, Oscar Arias y luego con el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, después de la reunión con la CNR. Por supuesto que la proyección internacional de estas entrevistas llega mucho más allá de San José y Managua. Y 2) parece que el apoyo logístico que antes estuvo a la altura de la exigencia bélica, no es ahora suficiente y el esfuerzo de guerra ha sufrido merma en favor del Ejército, que ha mantenido la ofensiva iniciada en septiembre de 1987. Esto obliga a la negociación, pero también puede ser factor importante la realineación de fuerzas en el mundo y el sesgo político que es notorio al interior de la Unión Soviética.

De todas maneras, la URNG evidentemente hace planteamientos que van dirigidos a: 1) que se reconozca su presencia como interlocutor válido en función de los años de guerra que han librado y libran; 2) como corolario de ese reconocimiento, participar en un gran Diálogo Nacional en el cual se ventilen los problemas político-económicos y sociales del país y 3) que primariamente se acuerde una tregua de 90 días entre las partes combatientes. Las reacciones del Gobierno guate-

malteco han sido negativas.

El Presidente Cerezo dijo que desde la primera reunión con la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), fue notorio el interés de la guerrilla en buscar reconocimiento como beligerante, y por eso mismo, no se aceptó la presencia de funcionarios españoles. También dijo que la URNG no es representativa de la fuerza guerrillera combatiente, de manera que no es un interlocutor válido y, por otra parte, no tiene base social y se han amarrado a sus propias afirmaciones que ahora les sirven de autotrampa dialéctica.

En cuanto a la petición de la URNG de participar en un diálogo nacional, el Presidente sostuvo que no puede permitirse la presencia en un diálogo político de una fuerza en armas. La condición primaria es dejar las armas previamente. En el mismo sentido, el Ministro de la Defensa Nacional, General Gramajo, dijo que en un diálogo sólo pueden participar las organizaciones que estén dentro de la ley y que la URNG no está en este caso.

Dice el Ministro que el Ejército no condiciona las relaciones del gobierno con la guerrilla, sino que simplemente cumple con la Constitución de la República. Agrega que no puede concertarse una tregua con quienes pretenden representar a una banda armada que lucha por su supervivencia en las montañas.

Comenta el Ministro que no hay unidad entre la fuerza combatiente y la fuerza política de la guerrilla y que la visión política de la URNG ha quedado atrás por 10 años. La base social de la guerrilla es inexistente, solamente de septiembre de 1987 a

abril de 1988, el Ejército le arrebató a la guerrilla 5000 cautivos. En 1980, dice el General Gramajo, había 95 poblaciones controladas por la guerrilla en el noroccidente del país, su influencia se extendía a casi 300,000 habitantes y había 12,000 hombres como efectivos militares. A estas fechas, afirma, no controlan territorio, son como nómadas y sus efectivos no llegan a 700 hombres.

Al final de cuentas, el Ministro cree que no puede haber diálogo ni reconocer una fuerza inexistente.

Hasta ahora, la iniciativa la ha manejado la URNG a través de publicaciones de prensa y también usando a la Comisión Nacional de Reconciliación. Por lo menos dos objetivos están claros: 1) recobrar el prestigio y el apoyo internacional que les quitó la legitimidad del gobierno actual y 2) introducir en las filas de las Fuerzas Armadas un factor de discordia que les beneficie a ellos.

Es importante recordar que la iniciativa de diálogo de la guerrilla se produce después del éxito de la ofensiva militar iniciada en septiembre de 1987 y del acercamiento del gobierno de Cerezo a México. En este último caso, lo importante es que el santuario territorial de la guerrilla ha quedado vedado, al menos en parte.

Por otra parte, a través de las publicaciones de prensa de la URNG y el PGT, se puede prever que hay en toda la iniciativa de la vanguardia política de la guerrilla, la intención de estructurar un frente interno político asociado a la presión militar en términos similares a lo que ocurre en El Salvador con la Convergencia Democrática, la Unidad Nacional de

Trabajadores de El Salvador (UNTS) y el nuevo Movimiento Revolucionario Centroamericano de estudiantes universitarios.

Las organizaciones pro derechos humanos

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en el interior del país, así como agrupaciones internacionales de la clase de American Watch y Amnistía Internacional, son otro elemento de presión para el gobierno. La insistencia en que todavía se violan los más elementales derechos humanos y la constante exigencia para que se castigue a los militares supuestamente envueltos en esas violaciones en el pasado, ponen a la administración en un brete y debe de enfrentar esas críticas con buen criterio para solventar el prestigio internacional que ya se ha ganado.

La Jerarquía Católica

"La Jerarquía Católica apunta a una orientación de mayor activismo... Parece que se ha venido imponiendo una decisión más acorde con las recomendaciones de la CELAM en Medellín y Puebla" (Cruz Salazar, Desborde Militar + Inconsistencia Política = Crisis, 1985). Las manifestaciones más evidentes de esta toma de conciencia política se observan en las últimas Cartas Pastorales emitidas por la Conferencia Episcopal, tanto como en la participación analítica de los problemas sociales y políticos que afectan al país.

La posición militante asumida por la Jerarquía Católica le ha abierto un espacio de intermediación supuestamente reservado en el medio socio-político para instituciones que,

por su propia naturaleza, debieran responder a ese compromiso, como son los partidos políticos y otras organizaciones populares o de profesionales que en el contexto nacional deben responder al papel por el propio imperativo de las exigencias del sistema.

Los casos más específicos de la acción de la Conferencia Episcopal se concretan en la exhortación pastoral sobre el Bien Común, que fue ofrecida en ocasión del debate público sobre la propuesta gubernamental del reordenamiento tributario. En el mismo orden se dio la participación mediadora entre el Gobierno y la representación de la iniciativa privada (CACIF).

La mediación se ha dado institucionalmente por la Conferencia Episcopal, sin embargo, las formas de intermediación personales del Arzobispo Metropolitano, Monseñor Penados del Barrio, se han hecho tan comunes como efectivas.

No obstante la presencia de la Jerarquía y del Arzobispo como factores de mediación, lo que es más importante es la acción directa en el marco de los problemas socio-políticos. La Carta Pastoral Colectiva del Episcopado denominada "El clamor por la tierra" es, además de reciente, la expresión misma de la preocupación social de la Jerarquía llevada a la Iglesia misma y a toda la población guatemalteca. En ella, la Jerarquía hace una denuncia sobre el grave problema de la tenencia de la tierra y expone la situación de explotación y servidumbre a que está sujeto el campesino guatemalteco. Además, el contenido de la Carta Pastoral define la posición de la Je-

rarquía Católica en lo social, en términos como: "Es indiscutible que nada de lo que hemos hablado podrá realizarse, si no aceptamos la idea de que es necesario y urgente un cambio de las estructuras sociales pecaminosas y obsoletas de nuestra patria".

En el Plan Global de la Conferencia Episcopal para 1988-1989, en la parte de introducción dice la Conferencia que un objetivo general de su acción pastoral es "impulsar, en comunión y participación, la evangelización nueva en Guatemala, para crear hombres nuevos y comunidades renovadas capaces de colaborar en la construcción de una sociedad justa y fraterna".

En este documento se reconoce que "ha faltado una evangelización integral que comprometa y que libere no solo de la ignorancia religiosa actual, sino de las dolorosas consecuencias del pecado, manifestadas en estructuras de opresión y de muerte" y "la urgente necesidad de una Iglesia que reflexione y actúe con mayor profundidad y hondura desde los pobres, sin ningún tipo de reduccionismo ni exclusionismo". En estos términos y en uso de otros de igual dimensión, la Iglesia reconoce las deficiencias pasadas así como los esfuerzos hechos en tiempos difíciles en la denuncia y por "mantener su autonomía respecto a los poderes temporales".

En el Plan Global, la Conferencia expone su visión de la realidad guatemalteca y las formas de enfrentarla, entre otras, la formación de "auténticas comunidades cristianas que manifiesten su dinamismo en el espíritu, en la vivencia de la fe y en la

celebración del culto" y el empeño "en que cada hombre sea promotor de su propio desarrollo ...".

La intención manifiesta es impulsar una evangelización integral que, "sin traicionar los principios esenciales, posibilitará la penetración del Evangelio en lo hondo de la realidad económica, política, cultural y social".

Naturalmente que esta posición de la Jerarquía frente a la realidad nacional le ha traído dificultades. Por un lado, los sectores conservadores que estuvieron acostumbrados a tratar con una Jerarquía proclive a respaldar los términos de dominación tradicionales, se han resentido y se quejan de la tendencia izquierdista del Arzobispo y de la Conferencia Episcopal. Por otra parte, se promueve el "Lefevrerismo" como contrapartida de la orientación reformista de la Iglesia y se enfrenta también la amenaza de las iglesias y sectas protestantes.

En otro sentido, el Ejército resiente el comportamiento de los sacerdotes, especialmente en las áreas de penetración de la guerrilla.

Conclusión:

El cambio cualitativo político a partir de 1986 ha permitido diversas formas de participación en el escenario nacional, que se orienta a reivindicaciones políticas, económicas y sociales. El cambio también ha sido factor de presión a un gobierno que, en síntesis, tiene una máxima responsabilidad: procesar un régimen democrático en el país.

EL SALVADOR

En medio de la guerra que dura más de ocho años, la enfermedad del Presidente Duarte y la complejidad de la política partidista que incide directamente el interés presidencialista para 1989, El Salvador parece pasar por un período de dura prueba y es sorprendente el grado de estoicidad que muestra el pueblo salvadoreño que, además de la confrontación política, sufre las consecuencias directas de la presión económica, con su índice de inflación elevado y salarios reales sumamente bajos.

El Presidente Duarte pierde control del gobierno

El Presidente de El Salvador, ingeniero Napoleón Duarte, ha asumido la dirección de su despacho después de su hospitalización en Walter Reed en Washington; pero no parece que mantenga el control del gobierno a su regreso. Según una persona entrevistada, que tiene acceso rutinario al Presidente, los ministros, empleados y políticos importantes, no consultan decisiones con el mandatario supuestamente para no agravar su estado de salud. Pero eso se ha traducido en una especie de descentralización con carácter de anarquía, ya que no hay dirección responsable.

Dos casos ilustran esta situación:

1. Cuando el comandante guerrillero Mario Aguñada Carranza, que hace unos diez años participó en la Unión Nacional Opositora (UNO), pretendió, a principios del mes de julio, incorporarse a la vida política dejando el movimiento armado, el Coronel

Leopoldo Hernández, Viceministro de Seguridad, advirtió que no se le dejaría entrar y que, en todo caso, se le apresaría de acuerdo a orden de captura que se ha dictado en contra de él.

La intervención de políticos influyentes hizo cambiar la decisión del Coronel Hernández en sentido de que se concretara solamente a no dejar entrar a Aguñada Carranza. En este caso, el Presidente no supo nunca sobre estas decisiones militares.

2. Otro, el General Juan Rafael Bustillo, Jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña, envió una nota a la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS), de matiz marxista, en la cual les hizo una severa prevención sobre lo que podría ocurrir si llegaran a repetirse las manifestaciones violentas protagonizadas por esta organización obrera. Decía Bustillo en la carta: "no permitiremos manifestaciones violentas y otras actividades de disturbios" y "sus actividades las pueden realizar cuando se nos comuniquen con 48 horas de anticipación."

Esta advertencia se suma a otras hechas a la UNTS por los directores de los cuerpos de seguridad, en el sentido de que los dirigentes sindicales serían capturados y enjuiciados por los daños que provocasen. El Ministro de la Defensa Nacional, General Vides Casanova, por su parte, dijo que aun cuando no hubiese estado de excepción en el país, se tomarían las medidas pertinentes en contra de la UNTS.

De todo esto, el Presidente no tenía conocimiento. Nuestro entrevistado aseguró que muchas decisiones son tomadas por empleados y organismos subalternos, sin que lo sepa el Jefe del Ejecutivo.

Siguen las tribulaciones del Partido Democracia Cristiana

Todo hacía creer que al sancionar la Convención del Partido la candidatura de Fidel Chávez Mena, los problemas pre-electorales de Democracia Cristiana (PDC) terminarían y se podría preparar el proceso electoral.

Pero no fue así, dos hechos han venido a remover las aguas políticas partidistas.

Primeramente, el excoordinador de la Comisión de Restauración de Areas (CONARA), que manejó los fondos para las víctimas de guerra y del terremoto ocurrido en San Salvador, diputado Luis Mejía Miranda, aseguró a una comisión especial investigadora de la corrupción, que para disponer del dinero recibió órdenes del hijo del Presidente Duarte, actuando como asesor presidencial, y del Doctor Fidel Chávez Mena, en su calidad de Ministro de Planificación. Mejía Miranda involucra, asimismo al actual Ministro de Agricultura, Antonio Morales Ehrlich.

La Comisión Investigadora intenta oír a Duarte, Ehrlich y Chávez Mena para que aclaren su situación.

Por otra parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de amparo presentado por la Directiva del Partido Demócrata Cristiano, que fue desplazada por la Convención que sancionó la candidatura presidencial

de Chávez Mena.

La Corte admitió el amparo presentado por los diez y siete miembros de la Junta Directiva, considerando únicamente su calidad de personas naturales, o sea que no los ampara como parte institucional del PDC. La petición de amparo es sobre la decisión del Consejo Central de Elecciones que desconoció a los presentados como dirigentes legítimos del PDC y dio la dirección del partido a los seguidores de Chávez Mena.

Según el testimonio de una persona que ha participado en el conflicto partidista, todo esto agudiza la división en el PDC y cree que Chávez Mena habrá de sufrir menoscabo en su campaña presidencial, si llega a realizarla. Además de que el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que controla la asamblea legislativa, ha volcado sobre la gestión de Chávez Mena como Ministro de Planificación la responsabilidad del estancamiento de la producción, debido a sus políticas erráticas y a la corrupción.

El entrevistado también aseguró que si en estos días se llevara a cabo la elección de Presidente en El Salvador, sería el candidato de ARENA el que seguramente ganara y piensa que la perspectiva a 1989 parece la misma.

Se abre el frente de izquierda en El Salvador

Personas que están muy cerca del Ejército y del gobierno de El Salvador, afirman que fue un error impedir que regresara a incorporarse a la vida política el Comandante Mario Aguñada Carranza, porque esto

desvirtúa el propósito expresado por el gobierno salvadoreño de permitir y estimular a los guerrilleros para que presenten sus demandas de cambio dentro del sistema imperante.

Aguñada es de los políticos que salieron de El Salvador porque no hallaron una alternativa viable en el medio; fue dirigente de la Unión Nacional Opositora (UNO) y, como antes lo hicieron Manuel Ungo y Rubén Zamora, del llamado Frente Revolucionario Democrático (FRD) intentó unirse a la corriente política del país.

La intención de Aguñada es importante porque evidencia que la izquierda asociada al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) se organiza dentro del sistema político imperante, no sólo para dar la batalla político-eleccionaria, sino para actuar como frente revolucionario interno en el país.

La estrategia se practica con el regreso de Ungo y Zamora, que forman la llamada Convergencia Democrática que ya ha logrado un perfil político reconocido; Rubén Zamora ha presentado al Consejo Central de Elecciones (CCE), la documentación exigida para inscribir el partido Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC). La prueba ante el CCE será de un término de 60 días y si resuelve afirmativamente, el partido quedará registrado.

Zamora presentó 3,500 afiliados con carnet y 2,500 sólo con cédula de identidad.

La Convergencia Democrática agrupa al Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) de Manuel Ungo, el Partido Social Demócrata (PSD) que dirige Reni Roldán y el Partido

Unión Democrática Nacionalista (UDN), que todavía no ha sido aceptado, pero seguramente se hará en el futuro.

Otro aliado del FMLN, la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS), que es la organización obrera más poderosa del país y de matiz marxista, ha hecho demostraciones violentas en las calles de San Salvador, rompiendo vitrinas de almacenes e incendiando automóviles. El Ejército, por medio del General Luis Rafael Bustillo, ha prevenido a la dirección de los trabajadores que si repiten los desórdenes, serán reprimidos. Estas actitudes de la UNTS, han tenido reprobación popular, de manera que hay una corriente de repulsa que no ayuda a la causa revolucionaria de la UNTS.

Está claro que la estrategia diseñada por la izquierda de El Salvador, tal como lo prevenimos antes, es la de armar un frente político interno que haga sentir la presión política y militar al gobierno y al Ejército. Por eso es tan importante la sobrevivencia política unitaria del Partido Democracia Cristiana, ya que si esta posibilidad intermedia se debilita, la polarización entre la extrema derecha representada por la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y la Convergencia con la guerrilla en la extrema izquierda, hará de El Salvador el epicentro del conflicto político que viene afligiendo a Centro América.

Las Fuerzas Armadas, vistas por un civil

De acuerdo al punto de vista de uno de los políticos que están muy cerca del gobierno del Presidente



Napoleón Duarte, así como de la cúpula de mando de las Fuerzas Armadas, el Ejército de El Salvador ha tenido un cambio cualitativo en dos órdenes, durante el transcurso de la guerra:

1. cambio en cuanto a las formas técnicas de combate y conducción de la guerra, y
2. cambio de mentalidad en cuanto a los orígenes de la guerra y su relación al proceso de democratización.

El entrevistado precisa que el Ejército bajo la dirección del General Vides Casanova se ha divorciado de la oligarquía económica que tradicionalmente ha dominado el país y, según su criterio, esto le permite a las Fuerzas Armadas hacer una apreciación más realista de los problemas de estructura que afronta El Salvador y que necesitan ser resueltos. En ese sentido el Ejército procesa un proyecto desarrollista que produce resultados positivos no solamente en cuanto al alivio de las condiciones de miseria existentes, sino en el apoyo popular que se obtiene en la conducción de la guerra.

Dice el interlocutor, (quien ha sido actor responsable en el diálogo con la guerrilla) que la visión militar del trato con los rebeldes cambia según la posición y rango de los oficiales. O sea que la oficialidad que se mantiene en las áreas de combate, no es proclive a dialogar con la guerrilla, pero aquellos que salen del choque directo militar para dirigir desde posiciones no combatientes, generan otra visión de las posibilidades de paz. De acuerdo a este criterio, él ha sugerido y se le ha aceptado, que los

oficiales de alto rango sean constantemente rotados de una posición de combatiente a una de no combatiente, con el fin de concientizarlos en dirección del diálogo.

Piensa que la guerrilla padece del mismo síndrome de combate y que mientras su dirigencia no salga de la montaña, no podrá desarrollar criterios más amplios sobre el diálogo, eso es, dice, el caso de Joaquín Villalobos y Leonel González, que no han rebasado el estado de guerrilleros y descuidan las posibilidades que ofrece el trato político.

En otra parte de la conversación, expuso que el cambio que se acaba de dar en las Fuerzas Armadas de un 80% en todos los mandos superiores y de 50% en la cúpula, no tiene mayor trascendencia en cuanto se trate del proceso democrático que se experimenta en El Salvador. Pero cree que habrá de sentirse alguna tendencia hacia el Partido de la derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que ahora domina la Asamblea Legislativa.

Finalmente, el entrevistado asegura que al hacer un balance objetivo de las tareas de las Fuerzas Armadas durante los últimos diez años, éste habrá de ser favorable al Ejército. Considera que las Fuerzas Armadas gozan de la estimación de la población.

El Ejército y la guerra, punto de vista militar

El entrevistado es uno de los Jefes Militares de más alto rango con responsabilidad de operaciones de guerra. Tiene el rango de Coronel y ha sido uno de los más eficientes oficiales en el área de combate. Sus

juicios son expresados con soltura y en una jerga propia de los científicos sociales. Según él, el problema de la guerra está sujeto a dos perspectivas:

1. lo que llama el estructuralismo, y
2. la intervención foránea.

En el marco del estructuralismo fija los orígenes de la guerra en las condiciones de subdesarrollo del pueblo salvadoreño, específicamente en el grado de miseria, la falta de educación (ignorancia) y las condiciones precarias de salud, que no satisfacen las condiciones mínimas de existencia.

Es evidente que esta conciencia es producto mismo del cambio de mentalidad sufrida por la oficialidad al familiarizarse con una realidad que sólo puso a su alcance la guerra salvadoreña. De todas maneras, el discurso del entrevistado estuvo en armonía con los objetivos político-militares que desarrolla el Ejército dentro del marco de un proyecto político desarrollista.

La intervención extranjera, como segunda causa de la guerra, específicamente queda en la intervención nicaragüense y cubano-soviética, aunque no desestima el interés norteamericano que por muchos años ha estimulado regímenes oligárquicos en el esquema político de la vida salvadoreña.

Dentro de ese marco de referencia, el coronel entrevistado se refiere a la guerra y su conducción de acuerdo a experiencias, y manifiesta, en primer término, que se ha divulgado un concepto equivocado en el sentido de que la guerra salvadoreña se ha "empantanado" o sea que existe un empate entre las fuerzas

combatientes que no permite una salida victoriosa a ninguna de las partes. Esto, dice, no es verdad, porque el Ejército de El Salvador detuvo el empuje guerrillero que llegó a un punto de transferir el concepto de guerra irregular a uno convencional, en tanto que logró el control del territorio, especialmente en el Departamento de Morazán. Es decir, que de la estrategia de una guerra de triunfo rápido desarrollado por la guerrilla, se vio obligada a revertirla a una guerra prolongada, lo que en sí significa un éxito de la conducción militar de las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, afirma que el personal militar que lleva la guerra ha entendido que la paciencia, como factor primario en una guerra prolongada, es vital y que, si bien la guerrilla siempre lo ha valorado muy alto, el Ejército no lo hizo antes. Ahora se piensa que la guerra no es para resolverse a corto plazo, inmediato éxito, sino que debe visualizarse como un conflicto proyectado en el tiempo y que si ésta tiene que durar mil años, pues sobre esta base debe planificarse.

Apunta el entrevistado, que se da un cambio en la mentalidad de la oficialidad que deja el área de combate para ceñir responsabilidades de dirección que se relacionan con la dirección de la guerra y con el escenario político a la vez y que esta visión de mayor amplitud, permite considerar las posibilidades de diálogo con la guerrilla. A esto le llama el cambio institucional. Asimismo, sabe que el trato con las fuerzas sociales salvadoreñas ha tomado un nuevo giro, lo que ha hecho que los problemas de seguridad se resuel-

van con criterio legal, rechazando la acción violenta inmediata como respuesta, al margen del derecho, como se hizo en el pasado.

Otro aspecto positivo que hace observar, es que el aparato productivo de El Salvador empieza a reaccionar favorablemente, lo que implica mayor confianza en el Ejército y en el gobierno.

En resumen, el jefe militar entrevistado, considera que el Ejército salvadoreño ha logrado importantes éxitos de guerra y que el proceso de cambio técnico y comprensión de los problemas políticos y sociales les pone en condiciones de solventar el problema militar, aún cuando para esto sea necesario un largo tiempo.

Las posibilidades de un debate nacional

El Arzobispo de San Salvador, Monseñor Rivera y Damas, convocó a cientos de organizaciones privadas: universidades, asociaciones empresariales, organizaciones populares (obreras y campesinas) y a todas aquellas que desearan asistir, a un DEBATE nacional con el fin de hacer llegar al gobierno y a las fuerzas armadas a un acuerdo general que trace líneas para resolver la crisis política y militar que aflige al país desde hace más de ocho años.

El procedimiento se ha hecho simple: cada organización convocada debería presentar sus apreciaciones sobre el problema, por escrito, y formular las soluciones pertinentes.

Posteriormente una gran asamblea discutiría sobre las proposiciones individuales y concluiría con un documento que sería presentado a

las autoridades políticas y militares de la nación. El evento estuvo propuesto para realizarse el presente mes de agosto.

Por ahora, el debate parece que ha encontrado obstáculos debido a que las organizaciones patronales y aquellas que transitan por la vía del conservatismo, consideraron que el DEBATE no era sino una forma de adherirse a la política diseñada por el FMLN. A *contrario sensu*, las organizaciones populares respondieron positivamente, pero en estos términos contradictorios no pudo lograrse el propósito fundamental del debate, como fue la reunión de todas las fuerzas sociales para convenirlos en un intercambio de ideas y planteamientos sobre la crisis salvadoreña.

La UCA, Universidad José Matías Delgado, hizo severa crítica de las organizaciones que se opusieron a la convocatoria, en tanto que la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños, se negó a participar aun cuando envió sus consideraciones acerca del problema. En otro sentido, la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador, participó e hizo público lo que llamó sus aportes, insistiendo en la necesidad de la conciliación nacional a través de un proceso de negociación y la formación de "un gobierno de transición cuya composición sea multilateral".

En general, el DEBATE tuvo solo éxito parcial, ya que la ausencia de empresarios y otras organizaciones le restaron plenitud al evento. Quizás en la convocatoria se haya incurrido en el error de no convocar al gobierno, a las fuerzas armadas y a

los partidos políticos.

Partidos políticos de oposición

El término del período presidencial el ingeniero Napoleón Duarte y, consecuentemente, la elección presidencial fijada para el año de 1989, incide agudamente en el campo de la política salvadoreña. Los partidos se entregan febrilmente a la organización de asambleas, búsqueda de candidatos y de posibles alianzas partidistas, en los casos en que esto sea posible.

En otro apartado nos hemos referido a la acción de la llamada Convergencia Democrática, compuesta por los partidos Movimiento Nacional Revolucionario, el Partido Social Demócrata y el Partido Movimiento Popular Social Cristiano. Esta es la izquierda y hemos comentado su orientación y estrategia. Aquí se destacan Rubén Zamora y Reni Roldán, como una probable fórmula presidencial, aunque se menciona también a Manuel Ungo.

En la vía del conservatismo, el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), parece inclinarse por Alfredo Christiani como candidato presidencial. Este partido ganó recientemente las elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa y municipalidades. Actualmente, controla el Organismo Legislativo con mayoría absoluta. La oposición política de esta institución de derecho público es penetrante y ha llegado a extremos tales como el de humillar al Presidente Duarte, obligándolo a llegar a la Asamblea Legislativa, para ratificar el permiso solicitado para salir del país por motivos de salud.

Otros partidos de línea conserva-

dora se han coaligado para hacer frente a la izquierda, a Democracia Cristiana y ARENA. Estos son: el Partido Liberación, dirigido por Hugo Barrera, Auténtico Institucional Salvadoreño, bajo la dirección de María Julia Castillos y el Popular Salvadoreño de Francisco Quiñonez. Esta coalición partidista rechaza la adhesión de otras organizaciones políticas y aún no ha decidido sobre su candidato a presidente.

La oposición conservadora parece que encuentra su fuerza y representatividad en ARENA y seguramente la campaña presidencial se podrá definir entre este partido, Democracia Cristiana y Convergencia Democrática.

Parlamento Centroamericano

La cúpula dirigente del partido Alianza Republicana Nacional, ARENA, siempre ha manifestado su desacuerdo con la idea del Parlamento Centroamericano propuesto por el Presidente de Guatemala, licenciado Vinicio Cerezo Arévalo.

A estas fechas, ARENA controla la Asamblea con 31 diputados, es decir, con mayoría absoluta, lo que hacía incierta la posibilidad de una ratificación del tratado. Sin embargo, parece que hubo un acercamiento del partido al gobierno de Guatemala, lo que llevó a la ratificación del tratado.

Escuadrones de la muerte

Desde la aparición del grupo Consejo Militar Nacional el año 1987, se da el resurgimiento de los escuadrones de la muerte. Supuestamente son formaciones de oficiales retirados, que están descontentos de



como se lleva la guerra. De acuerdo con informaciones publicadas, se han identificado 24 muertes por la mano de estos escuadrones durante el año de 1987, y 21 durante lo que va de este año. Como contrapartida, la guerrilla ha ejecutado a 29 personas civiles en 1987 y 17 durante lo que va de este año.

La compleja política de El Salvador y, sobre todo, la posibilidad de que el PDC se neutralice como una fuerza política decisiva, hace suponer que en un futuro cercano el país será el punto neurálgico del conflicto en Centroamérica, desplazando a Nicaragua. Si eso se diera, el problema sería de mayor trascendencia que el problema nicaragüense, porque la bipolarización no se daría solamente a nivel de facciones sino a un plano más amplio, que involucraría la totalidad social.

HONDURAS

El Presidente de la República, José Azcona, atraviesa por un periodo de dificultades políticas y económicas. Las dificultades políticas se dan por efecto de la movilización partidaria interna en busca de la candidatura presidencial que ha de presentarse en las elecciones de 1989.

En el seno del Partido Nacional la selección está clara en Rafael Leonardo Callejas, quien en las elecciones de 1985 obtuvo la mayoría de votos, pero debido a las normas electorales muy *sui generis* que rigieron en aquel evento electoral salió electo el actual Presidente Azcona, aun cuando la diferencia de votos

entre uno y otro fue de más de doscientos mil en favor de Callejas. Esta forma de elección se decidió después de firmada el Acta de Compromiso por medio del cual se resolvió el conflicto de jurisdicción surgido entre los organismos de Estado, Ejecutivo y Judicial, que amenazó con un rompimiento constitucional. En la solución de ese conflicto jugaron un papel sobresaliente las organizaciones obreras. En todo caso, de la misma Acta llamada de compromiso se derivó un acuerdo entre los partidos políticos Nacional y Liberal, para hacer una repartición equitativa de los órganos de Estado. De esa cuenta, no hay una mayoría efectiva partidista en la Asamblea Legislativa y para el ejercicio de la presidencia, esto significa limitación decisoria.

La competencia electoral intrapartidista ha dado paso a disensiones en el gabinete ministerial que, con la excepción de dos ministros, apoya al pretendiente Carlos Roberto Reina, respaldado por la Coordinadora de Unidad Liberal (CUL). Reina recién estuvo encargado de la comisión que lleva el caso de la controversia de límites con El Salvador en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. También son una excepción los ministros Rodrigo Castillo y Enrique Ortiz Colindres, leales a Carlos Montoya, Presidente del Congreso Nacional, que está respaldado por el Movimiento Amigos Leales de Carlos Orvin Montoya (ALCOM) y que supuestamente arrastra una mayoría de diputados. Un tercer pretendiente a la candidatura, Carlos Flores, es Presidente del Consejo General Ejecutivo del Partido Liberal, apoyado por el Mo-

vimiento Liberal Florista.

En toda esta prueba de fuerzas políticas dentro del Partido Liberal, el Presidente Azcona evidentemente ha dado su respaldo al pretendiente Carlos Roberto Reina y con ello ha movilizado a la burocracia gubernamental afiliada al Partido, pero eso le ha traído problemas; entre otros, el que la bancada liberal en el Congreso no responda a sus iniciativas de ley para sacar adelante la economía del país. Así se explican las declaraciones del Secretario del Congreso Oscar Melara, después de una reunión de alto nivel con los líderes de las bancadas liberales, entre los que se cuenta el pretendiente a la candidatura Carlos Roberto Flores, en el sentido de que el organismo Legislativo sólo aprobaría la prórroga por sesenta días de las exoneraciones fiscales que contiene la ley de Fomento Industrial contemplada en el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, si como contrapartida el Presidente elabora un plan de austeridad y ponga en el gobierno a gente capaz de sacar adelante la situación económica. O sea, que sean removidos varios miembros del gabinete.

La situación política, ha colocado al Presidente Azcona en una situación precaria en la cual no tiene mayor espacio para hacer efectivas sus decisiones de gobierno, si es que puede, de alguna manera, tomarlas sin que se mezclen en el juego político electoral. Dice a este respecto el candidato del Partido Nacional Callejas: "...pidanle a Azcona que pase una ley en el primer poder del Estado con respaldo de su

partido y verán que no puede ... aquí lo que está ocurriendo es lo mismo cuando Suazo Córdoba se enfrentó contra ese poder y llevó a una tremenda crisis al país".

En el campo de la economía, el gobierno es criticado por su empeño en sacar adelante la economía descansando únicamente sobre leyes arancelarias y con descuido de la reducción del gasto público, del estímulo al ahorro y de la carga tributaria que debe responder principalmente, según los diversos grados de acumulación de la clase pudiente.

En el terreno financiero, el Lempira ha perdido valor, en tanto que el del dólar está oficialmente a 2 x 1, en el mercado paralelo se cotiza a 2.50 o 3.00. El Consejo de la Empresa Privada (COHEP), ha pedido al Congreso en un proyecto de ley que ha enviado, que se reconozca un nuevo cambio del Lempira cuando se contabilicen las operaciones hechas en moneda extranjera. Esto, a pesar de que se acusa a los empresarios de responsabilidad en la alta cotización del Lempira por la desusada competencia en conseguir la moneda norteamericana, según lo que ha hecho público el Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria, Juan Antonio Bendeck.

Por otra parte, se hace evidente el elevado índice inflacionario, y, consiguientemente, la desvalorización real de los salarios.

Si se hace una comparación entre la desvalorización actual y la solidez del Lempira de 1987, puede pensarse que la presencia de los "contras" en territorio hondureño y con ella la fluidez de la ayuda norteamericana



en dólares para mantener la fuerza antisandinista, fue un factor incidente en la bonanza del año de 1987 asociado a la ayuda de Estados Unidos al gobierno hondureño. Estas dos fuentes de soporte financiero han disminuido sensiblemente en tanto que no se ha estimulado otras fuentes nacionales de ingreso y producción.

De esta manera, la situación económica es crítica y no aparece a la vista un alivio a corto plazo.

Diálogo Nacional

El Presidente José Azcona ha recibido de la Comisión de Reconciliación Nacional un documento que contiene los temas que se incluirán en la realización de un Gran Diálogo Nacional. El Presidente de la Comisión Monseñor Héctor Enrique Santos, hizo una exposición sobre el trabajo de las comisiones de justicia, economía y reforma agraria, y observó que la comisión política no ha presentado ningún informe debido a que los partidos políticos no pudieron reunirse para elaborarlo. A diferencia de lo que ocurre en otros países centroamericanos, en Honduras será el Presidente de la República el que habrá de convocar el Gran Diálogo en una fecha que considere propicia. Sin embargo, el gobierno no parece muy interesado en el progreso de la CRN, bajo el pretexto de que no compete a Honduras este compromiso de Esquipulas II.

Los problemas del tráfico de drogas

La preocupación gubernamental por el tráfico de drogas se materializa en la formación de una comisión

institucional que trate el problema en la cual tienen participación la empresa privada, organizaciones populares, partidos políticos, gobierno y la Iglesia Católica. Esta última ha informado al Presidente de la República que no continuará en la Comisión, porque, dice el Presidente de la Conferencia Episcopal, la misión de la Iglesia rebasa esa clase de actividades.

Aparentemente, la conexión del narcotráfico ha llegado a tocar círculos altos de influencia política. Este es el caso del General Rigoberto Regalado Lara que en su calidad de Embajador de Honduras en Panamá, fue arrestado en Miami el 15 de marzo recién pasado, portando 12 kilos de cocaína. Según las autoridades norteamericanas, Regalado es una pieza importante en el tráfico de drogas. Igualmente, debe recordarse el caso de Thomas Said Speer, Agregado Militar a la Embajada de Honduras en Colombia, que fue involucrado en actividades de narcotráfico.

Por otra parte, el Jefe de las Fuerzas Armadas, General Humberto Regalado Hernández, fue condecorado en Estados Unidos por su cooperación en la persecución del tráfico de drogas, aunque se ha dicho que en realidad el premio se debió a la entrega de Ramón Matta Ballesteros que fue expulsado a la República Dominicana, donde fue apresado por los agentes norteamericanos. El Presidente Azcona ha dicho que, ahora, formaliza convenios con Estados Unidos para combatir el narcotráfico a través de la vigilancia aérea de las aguas hondureñas, así como otros tipos de arreglos que van en el mismo sentido.

El Procurador General del Estado, Rubén Zepeda, ha sido sometido a juicio por complicidad en el narcotráfico, según proceso que seguía Miguel Angel Izaguirre y aún cuando éste dijo que tenía en sus manos las pruebas para condenar a Zepeda, fue destituido por el representante del Organismo Judicial en la ciudad nortea de Tela. Izaguirre involucró en sus declaraciones a la prensa, al Presidente del Congreso y candidato a la nominación presidencial por el partido Liberal, Carlos Montoya, pero éste negó la acusación.

Los periódicos norteamericanos New York Times, Los Angeles Times y Miami Herald publicaron artículos relacionando a oficiales del Ejército y funcionarios hondureños en el narcotráfico, supuestamente basado en información del Departamento de Estado. La prensa hondureña se hizo eco de las publicaciones en Estados Unidos.

Finalmente, como dice uno de los columnistas del diario La Tribuna: "las pruebas no develizan el escándalo de toda una época".

Los movimientos subversivos

El gobierno hondureño y las fuerzas armadas rutinariamente han minimizado la presencia de los movimientos rebeldes en territorio de Honduras, especialmente del Movimiento de los Cinchoneros y del Frente de Liberación Zelaya; sin embargo, a principios de este año el Mayor Rodolfo Raúl Díaz Vásquez, del Departamento Nacional de Investigaciones, admitió los riesgos que implica la lucha en contra de la subversión.

También el Mayor de Policía Ma-

nuel Antonio Urbina se ve preocupado en la búsqueda de células subversivas que han realizado atentados dinamiteros. O sea que, públicamente, se reconoce la existencia de movimientos guerrilleros, y se da la prueba en el atentado en contra de miembros del ejército de los Estados Unidos en San Pedro Sula.

En el mes de julio recién pasado, el Director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, Coronel Manuel Suárez Benavides, dijo que el plan subversivo está vigente y que la tarea de control es prioritaria para el Ejército. Afirmó que las fuerzas de seguridad pública son como la primera línea que enfrenta el problema y que las fuerzas armadas les dan el respaldo necesario.

En el frente terrorista, según la denuncia de la Federación Unitaria de Trabajadores (FUTH), de tendencia marxista, y la Central de Trabajadores del Campo (CNTC), así como el Comité de Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), existe un plan represivo en contra de las organizaciones populares, dirigida por la Alianza de Acción Anticomunista (AAA), con ánimo de intimidar a los dirigentes populares. También señalan que efectivos militares han allanado viviendas de los dirigentes Héctor Hernández, Gladys Lanza y otros, pintando en las paredes el símbolo de las tres Aes.

Cementerios clandestinos como el encontrado en El Palmar, en Omoa, Cortez, se han denunciado, así como la falta de colaboración de la Seguridad Pública para identificar a los sepultados; se dice, asimismo, que dos sargentos que en ocasiones han prestado su colaboración, no se

han presentado a los requerimientos del juez encargado de las pesquisas, y que han sido removidos de sus puestos y no se ha sabido el lugar de su traslado.

Esquipulas II, el no uso del territorio para agredir otros estados

La cuestión de las bases militares norteamericanas en territorio hondureño y la presencia de la Resistencia Nicaragüense, siguen vigentes.

En efecto, no ha habido cambio en cuanto a las bases militares construidas por Estados Unidos en Palmerola, El Aguacate, especialmente en el archipiélago El Cisne, con sus modernas instalaciones sofisticadas de radar y las pistas con capacidad para recibir aviones del tipo C-5 y C-141. La vigilancia de las bases, además de la restricción de vuelos civiles sobre ellas, está a cargo de lanchas de la marina hondureña de tipo Dabur y artilladas con ametralladoras 50 y un cañón controlado por radar. La intención de las bases, es proveer seguridad para Honduras y a la vez estimular la capacidad de interdicción de cualquier ayuda que se diera a Nicaragua viniendo del Caribe.

En cuanto a la presencia de la Resistencia Nicaragüense (la llamada "Contra"), hay criterios diversos; pero en todo caso, parece que prevalece el interés hondureño que se manifiesta en la ayuda económica de los Estados Unidos directamente (recientemente fueron asignados US\$75 millones como contribución norteamericana a Honduras), o en forma indirecta, por el efecto que tiene en la economía del país la

ayuda conocida como humanitaria a la "Contra", de 27 millones de dólares que acaba de aprobar el Senado de los Estados Unidos.

Por otra parte, dice el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos López Contreras, que es muy difícil expulsar o sacar a la "Contra" debido a que, según los acuerdos del cese de fuego parcial entre el Gobierno de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense, alcanzados en Sapoá y Managua, se establecieron enclaves para concentrar a las fuerzas rebeldes, y algunos de estos enclaves están casi colindando con la frontera hondureña, lo que hace difícil controlar la presencia de la "Contra" en territorio hondureño. En todo caso, el liderato de la Resistencia en Miami afirma que hay en territorio hondureño 8,000 combatientes y 5,000 civiles nicaragüenses.

Por otra parte, el Jefe de las Fuerzas armadas hondureñas expresó su preocupación por la presencia de la "Contra", pero al mismo tiempo dijo que debe, a la vez, entenderse que deben ser atendidos por razones humanitarias.

En resumen, estas dos cuestiones, aunque en el caso de las bases militares alegue el gobierno hondureño que es producto de un convenio militar entre Estados Unidos y Honduras, permiten considerar que el compromiso establecido en el Acuerdo de Esquipulas II sobre el no uso del territorio para agredir a otros estados, no ha sido cumplido por el gobierno del Presidente Azcona. Lo más positivo que se ha hecho es la aceptación de Honduras de una fuerza internacional que vigile las fronteras entre este país y Nicaragua.

pero ha condicionado su decisión al cumplimiento por parte de Nicaragua, de retirar la demanda contra Honduras ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, o sea, la demanda formalizada por la ayuda a los rebeldes nicaragüenses.

Los refugiados salvadoreños

Según afirmó el Coronel Roberto Rodríguez, funcionario del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas, unos 2,200 refugiados salvadoreños que han permanecido en territorio hondureño, regresarán voluntariamente a su país. Esto que parece positivo, está sujeto a la reserva de que estos refugiados deberán quedar en campamentos de salvadoreños que regresan a su país, que suman más de 13,000.

NICARAGUA

A pesar del esfuerzo del gobierno nicaragüense por lograr un acuerdo con la llamada Resistencia Nicaragüense, la intención no ha prosperado. Las posiciones, hasta ahora, no parecen reconciliables. Se pueden localizar diez y seis puntos de divergencia, pero en realidad las cuestiones de mayor aspereza radican en: 1) la exigencia del gobierno de un cese del fuego definitivo y el reintegro de los rebeldes a la vida civil. A esto responde la Resistencia exigiendo el acuerdo previo de un *modus operandi* que regule la formulación de bases operativas sobre la amnistía, la libertad de presos políticos y la democratización. 2) El contenido conceptual de democrati-

zación no parece ser de común interpretación. Mientras el Gobierno lo limita a otorgar plenas seguridades a la "contra" para que se incorpore a las corrientes política y civil que ofrece el sistema, la Resistencia le da una connotación mucho más amplia que, en buenos términos, significa un cambio en el proyecto político revolucionario, o sea: a) la separación del Ejército Popular Sandinista, la Burocracia y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, (o sea gobierno, partido y ejército) y b) una reforma constitucional de diez y siete puntos, que ya fue antes exigida por la llamada Coordinadora Democrática y que significaría, si se cumpliera, una variación radical en cuanto al proyecto socialista de la revolución sandinista. 3) Otras diferencias se centran en el proceso de cese del fuego, debido a que las partes tratan de lograr la mayor ventaja en cuanto a control de los enclaves acordados (funcionamiento, seguridad y potestad jurisdiccional), y, también, en las formas de la distribución de la llamada ayuda humanitaria aprobada por el Congreso de los Estados Unidos para la "contra".

Así quedó definida la situación y, luego, desde la última reunión de los días 28 y 29 de abril recién pasado, no ha sido posible concertar otro encuentro, debido a que la Resistencia se empeña en realizarlo fuera de Nicaragua mientras que el Gobierno considera que Managua es el sitio obligado. Ahora, la Resistencia inculpa al Gobierno del fracaso de las conversaciones de paz y desde esa trinchera obstaculiza la continuación de las pláticas, sin ningún objetivo claro, lo que explica su compor-

tamiento como propio de la presión del gobierno de Estados Unidos que a su vez, busca la continuación de la ayuda bélica para reforzar el esfuerzo militar que impone la "contra" sobre el gobierno de Ortega Saavedra.

Tal vez un resultado positivo como producto de estas conversaciones, haya sido la disminución de las tensiones entre los gobiernos de Honduras y Nicaragua.

El juego de la política interna

Después de dos años de presentado el proyecto de normas para la elección de municipalidades, la Asamblea Legislativa les dió su aprobación, lo que significa que en el curso de este año se integrará el régimen político administrativo de la nación. Interesa la elección porque pondrá a prueba la voluntad de los partidos políticos de oposición para participar en el certamen electoral. Estos partidos, en especial los que integran la Coordinadora Democrática, se rehúsan a participar en los eventos electorales, suponiendo que el gobierno no habrá de ofrecer garantía contra el fraude. La estrategia de no participación deja a las fuerzas opositoras sin objetivos que permitan, por lo menos, alguna intención de unificación, ya que las fracciones partidistas como están en la actualidad no suponen una fuerza de resistencia política al régimen; tres partidos de tendencia social cristiana, tres partidos de tendencia conservadora y dos partidos de tendencia liberal, que disputan supuestas representatividades.

Aparentemente, esa disensión en los partidos de oposición se da por

la disputa del control de los aportes financieros que, de alguna manera, se reciben. La única posibilidad aparente, es la unidad de acción entre el Partido Social Cristiano que dirige Erick Ramírez y el Partido Liberal Institucional, bajo la jefatura de Virgilio Godoy.

La resistencia a la cuestión de comprensión en el terreno de participación electoral es de tal naturaleza, que estos partidos de oposición no han llegado ni siquiera a valorar positivamente la importancia que tiene la elección para integrar el Parlamento Centroamericano. Anticipadamente aseguran que el Gobierno ganaría la mayoría de escaños, pero no llegan a enjuiciar las ventajas que ofrece a nivel centroamericano y, en general internacional, un foro de esa calidad, para las minorías opositoras.

Por otra parte, es evidente el interés gubernamental por mantener esta división partidaria en la oposición, para reforzar sus intereses políticos.

La crisis económica

A ocho años del triunfo de la revolución sandinista, las condiciones económicas siguen en deterioro: racionamiento de productos básicos, alimentación y vestuario, con el agravante de discriminación en las cuotas de racionamiento, según la posición oficial o el nivel productivo; deficiencia en el transporte colectivo y los servicios, especialmente el fluido eléctrico.

Quede claro, eso sí, que el bloqueo económico norteamericano es muy responsable de esta situación, pero a eso se agrega la deficiencia administrativa y la incapacidad bu-

rocrática existente. Aparentemente, la ayuda de los países de la Europa del Este y otros del bloque occidental, ha sido muy mal manejada, y esto provoca la crítica popular y aun el disgusto de los representantes de aquellos países en Managua.

No se ve la posibilidad a corto plazo de mejoramiento en la difícil situación económica del pueblo de Nicaragua y este factor, en un momento dado, podría convertirse en un detonante político que amenace el proyecto revolucionario.

El Gobierno ha tomado medidas tendientes a corregir la patología económica: 1) se ha modificado la tasa cambiaria oficial en forma progresiva de 10 a 180 Córdobas por un dólar de USA. Con ello se ha pretendido que los exportadores reciban el justo precio de sus productos. Para solventar esta y otras situaciones, se intenta realizar constantes movimientos en la tasa cambiaria de acuerdo al índice inflacionario y se ha establecido un mercado cambiario regulado sobre la base de C.420 por 1US\$. 2) Se reguló una tasa de interés del 12% para el sector productivo y 45% para el sector comercial, y los créditos cargarán periódicamente con el índice de precios al consumidor. Esto para que los bancos estén en capacidad de recuperar su cartera. Para el ahorro fijo se anunció una tasa del 18%. 3) Se flexibilizó el salario y se aumenta en un 30%. De esta manera, se suprimió la escala fija de salarios que estuvo vigente. Del aumento no gozan los empleados del gobierno. 4) Las empresas podrán ajustar sus precios de acuerdo a las variaciones de sus costos y se eliminó la lista

oficial de precios. El Estado se reserva el derecho de controlar los márgenes de ganancia en las empresas monopólicas. Con estas medidas se intenta frenar la inflación, el mercado negro y el crecimiento desproporcionado del sector informal.

Represión

Las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente una manifestación pacífica y legalmente permitida por autoridad competente el día 10 de junio, en la población de Nadaime, a 50 kilómetros de Managua. Fueron detenidos: Agustín Jarquín, Secretario General del Partido Social Cristiano; Carlos Huembres, Secretario General de la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), afiliada a la Central Latinoamericana de Trabajadores de América Latina de tendencia social cristiana y también Presidente en funciones de la Coordinadora Democrática Nicaragüense; Myriam Argüello, Presidenta del Partido Conservador de Nicaragua; Roger Guevara, Secretario de la Coordinadora Democrática Nicaragüense; y otros cuarenta dirigentes políticos y laborales.

La policía rompió puertas y ventanas de la Confederación de Unidad Sindical, de tendencia social demócrata, en busca de líderes del trabajo. Agustín Jarquín fue severamente vapuleado, Huembres y la señora Argüello fueron sentenciados a seis meses de prisión; pero el Ministerio del Interior, a cargo de Tomás Borges, considera que los cargos de alteración del orden público son cargos mínimos y se procedió a tipificar el delito de "apología de la subversión" lo que hace probable

revisar la sentencia, de seis meses, para ser aumentada a una mayor, probablemente a cinco años.

La Internacional Demócrata Cristiana con sede en Bruselas, Bélgica, por intermedio de André Louis, Secretario General Adjunto, ha protestado ante el gobierno sandinista, enviado a todos los partidos democráticos cristianos del mundo la denuncia del atropello, y pedido a cada partido y a cada gobierno, concretamente, que demanden la libertad de los detenidos así como el respeto a los compromisos de democratización del gobierno de Nicaragua, de conformidad con lo acordado en Esquipulas II.

Igualmente se ha condenado a Mario Alegria, un economista del Instituto de Investigaciones de la Empresa Privada (INISEP) a 16 años de cárcel por inquirir sobre datos económicos, tales como el presupuesto de gastos de la nación, acusado de ser agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. A favor de este señor, nadie protesta.

Las proyecciones internacionales de la crisis

En el plano internacional, la situación se ha tornado sumamente compleja por la decisión gubernamental de declarar *non grato* al Embajador norteamericano acreditado en este país, Richard Melton, y varios miembros de la misión diplomática. Como era de esperarse, la Casa Blanca respondió expulsando al Embajador nicaragüense acreditado en Washington, Carlos Tunnermann, quien a la vez representaba a Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, y que por esto se ha

pleanteado un conflicto de intereses continentales porque se pone en duda la propia viabilidad del sistema interamericano, haciendo que se recuerde el caso de las Malvinas en el cual el Gobierno norteamericano actuó al margen del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, invalidando el mecanismo de defensa continental contenido en el Tratado de Defensa Interamericano de Río.

Estas cuestiones diplomáticas plantean una interrogante sobre los objetivos del Presidente Ortega, si se toma en cuenta que la primera respuesta del Gobierno norteamericano ha sido la reanudación de la ayuda a la "contra" y una ofensiva diplomática cerca de los otros cuatro gobiernos centroamericanos, cuyos resultados salieron a la vista después de la reunión de cancilleres el 1º. de agosto en Guatemala.

Es bien sabido que especular en materia de política exterior no solamente es arriesgado y resulta sumamente peligroso, si no se conocen los intereses nacionales y soberanos que se encuentran en juego; en tal virtud, así queda por saber si el Gobierno de Nicaragua ha definido ya una estrategia para enfrentar la respuesta norteamericana en función de la realidad objetiva de los países centroamericanos, que están obligados a medir serena pero seriamente, las consecuencias que traería para sus pueblos involucrarse en acciones militares directas en apoyo de los intereses norteamericanos. Factores positivos en esta coyuntura son: la imagen que Costa Rica tiene en la opinión pública mundial así como el interés del gobierno guatemalteco de consolidar

COSTA RICA

El Presidente Oscar Arias enfrenta problemas políticos internos que le han hecho, en algún sentido, perder la dirección del país. Este fenómeno se da igualmente en El Salvador, por la enfermedad del Presidente Napoleón Duarte y en Honduras, debido a la división interna del Partido Liberal por la selección de un candidato a la presidencia para 1989.

En el caso de Arias, la cuestión se da también en términos preelectorales, pero aquí tiene mayor incidencia el involucramiento de algunos miembros de la cúpula direccional del Partido Liberación en el narcotráfico. Para hacer la cuestión más explícita, en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

La cuestión salió a luz en junio pasado, al ser detenido Mario Valverde Zamora cuando trataba de introducir al país \$760,467 provenientes de Estados Unidos. Interrogado Valverde, confesó que hacía viajes a Los Angeles, en el estado de California, desde 1985, supuestamente para recoger motivos y afiches de propaganda política. En la ciudad mencionada, recibía cajas selladas, que trasladaba a Costa Rica y que en el aeropuerto Juan Santa María eran recibidas por políticos influyentes. Afirmó Valverde que Ricardo Alem León pagaba por pasajes y estancia en Los Angeles. Alem fue coordinador de la propaganda política, en cuanto a símbolos externos, del Presidente Arias, en 1986 y también ha sido miembro de la Comisión Nacional de Finanzas del Partido Liberación Nacional. Fue director del Banco Centroamericano de Integra-

un proceso democratizador alrededor de una política de neutralidad activa en el conflicto centroamericano.

En lo que concierne a los compromisos de Esquipulas II, el Gobierno nicaragüense ha reiterado su disposición a cumplirlos, aun cuando ha insistido en la vigencia de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento, CIVS, para constatar los hechos acaecidos en la región.

Es importante tener presente que el Gobierno de Nicaragua ya ratificó el tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano, lo que lo pone en ventaja frente a Costa Rica y El Salvador en lo que concierne a su decisión de participar en un proceso democrático de elecciones en el plano regional.

En materia de relaciones intracentroamericanas, Nicaragua, en la última reunión de Vicepresidentes Centroamericanos, hizo un planteamiento sumamente delicado en relación a su participación en el BCIE. Sobre este particular, formuló serias acusaciones a las autoridades del Banco respecto de tropiezos y obstáculos que han puesto a solicitudes de créditos formuladas por Nicaragua, así como a limitantes al ingreso de personal nicaragüense, lo que, aduce, responde a ingerencias directas del Departamento de Estado en esa institución y su dependencia de agencias norteamericanas. Cabe señalar que para las autoridades del BCIE la no aprobación de solicitudes de créditos por parte del Gobierno nicaragüense obedece a que este país se encuentra en mora desde hace algún tiempo.

ción Económica (BCIE) y, supuestamente, fue obligado a renunciar por el Presidente de la República, al notar que hacía constantes y fuertes depósitos de dólares en bancos de Costa Rica. Lo extraño en ese caso, y se comenta en el BCIE, es que a pesar de que Alem presentó su renuncia en el mes de febrero del año 1987, éste no la tramitó sino hasta la reunión de Gobernadores, unos meses después. Alem, que nació el 15 de febrero de 1954, también aparece vinculado a asesorías de empresas en Guatemala.

La aparente vinculación de Rolando Araya con Alem, que es candidato a la presidencia de la República en las elecciones primarias del Partido Liberación y el rechazo de su opositor político Carlos Manuel Castillo, para que se emitiera en el seno del Partido una declaración en el sentido de que ninguno de ellos estaba involucrado en el lavado de dólares, provocó una escisión partidista profunda y que amenaza con dividir el partido en un momento crítico. Por todo esto, se ha producido un distanciamiento entre el Presidente Arias y la bancada del Partido en el Parlamento, que le hace difícil la conducción del país.

Las acusaciones de corrupción al partido y a los gobiernos de Liberación que se han dado desde 1986, cuando se puso en la picota pública al presidente Luis Alberto Monge por un supuesto desfalco de 6 millones de dólares, propios del Fondo Nacional de Emergencia, han afectado la estructura partidista. Ya en el año de 1985, se descubrió una serie de actividades de narcotráfico y el gobierno calló los nombres de los res-

ponsables, este fue tema de debate durante la campaña política de 1986, especialmente en lo referente al mexicano Rafael Caro Arias, capturado por el Departamento Antidrogas del Gobierno de los Estados Unidos. Durante esa campaña se vinculó a autoridades políticas en el narcotráfico, pero nunca se identificó a los responsables a la luz pública. En todo caso, se hace evidente que existe una buena dosis de corrupción en las filas del partido y también dentro del gobierno de Arias.

Otras dificultades

El Presidente Arias confronta a la Unión Nacional que está integrada por unas cuarenta asociaciones agrícolas que reclaman el ordenamiento de una nueva política económica para el campo. Los problemas con la UNSA se han agudizado recientemente, pero vienen de atrás, a partir del fracaso de un intento de negociación entre los campesinos y el Gobierno en 1986. Los campesinos reclaman promesas no cumplidas del Presidente, que las ha llevado inclusive a montar huelgas en la Costa del Atlántico. El principal dilema radica en la exigencia de los campesinos organizados, que el campesino sea sujeto de crédito bancario, lo que, según se afirma, se ha hecho más difícil, debido a la sistemática privatización de la banca costarricense en los últimos años, supuestamente respondiendo a exigencias norteamericanas como condición para continuar la ayuda económica al país, que ha llegado a depender exageradamente de tales contribuciones de Estados Unidos.

También trabajadores del Consejo Nacional de la Producción han manifestado, así como intelectuales del grupo Soberanía que han protestado por la privatización. Según una encuesta del Diario La Nación, un 45% de electores dijo el año pasado que votaría de nuevo por el PLN ya en agosto de este año solamente un 12% fue positivo.

El Parlamento Centroamericano

El Presidente Oscar Arias, sabido de la resistencia de la Asamblea Legislativa a ratificar el tratado del Parlamento Centroamericano, retrasó el envío del proyecto a la Asamblea Legislativa. Finalmente, después de casi un año de la reunión presidencial del 7 de agosto de 1987 en Guatemala que produjo el Acuerdo de Esquipulas II, el Presidente envió el tratado, adelantándose a la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica con el Secretario de Estado Shultz, en Guatemala.

En la Asamblea Legislativa costarricense, la ratificación del tratado encuentra resistencia, porque una facción de la bancada del Partido Liberación Nacional no está convencida de su utilidad, y porque tanto el Partido Liberación como el Partido Unidad Social Cristiana, de la oposición, piensan que al aprobarse el tratado, se da por hecho que habrá una elección de parlamentarios centroamericanos dentro de los seis meses subsiguientes, y esto implicaría que los partidos someterían al público su capacidad de convocatoria electoral antes de las elecciones presidenciales de 1989, lo que de alguna manera, no les es atractivo.

En esas condiciones, la ratificación del tratado no parece asegurada.

PANAMA

Una nueva fase del militarismo panameño

El 13 de mayo recién pasado, por disposición de la Jefatura de las Fuerzas de Defensa de la República de Panamá (FDP), se creó el Consejo Estratégico Militar (CEM), con base en el Decreto Ejecutivo número 85 del 29 de octubre de 1984, que creó el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, del cual el Comandante en Jefe de las FDP es miembro permanente, y se dice que "a la luz de esta importante responsabilidad", se crea el CEM, cuya misión es asesorar al Comandante en Jefe y a su Estado Mayor General en las decisiones de carácter estratégico para el uso del poder militar nacional, en la integridad territorial y la soberanía nacional, que garantice la consecución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales hacia el año 2000.

Los siguientes oficiales conforman el CEM: Coronel Rogelio Alba, Teniente Coronel Moisés Correa, Teniente Coronel Aristides I. Hassan, Teniente Coronel Nivaldo Marín (Jefe del Departamento Nacional de Investigaciones -DENI-), Mayor Pascual González, Mayor Armando Palacios, Mayor Daniel Delgado Oliamante, Mayor José Hidalgo Trujillo (Jefe de la Fuerza Aérea Panameña), Mayor Luis A. Córdoba (era el Jefe de la zona de Chiriquí en ocasión del asesinato del Dr. Hugo Espadafora), Mayor Rafael A. Cedeno, Mayor Federico Olechea (Jefe del Batallón 2000),

Mayor Felipe Camargo Amaya (Subjefe de la Sección G-2 que supuestamente mueve organizaciones paramilitares), Mayor Humberto Malea, Mayor Francisco Porres, Capitán Jesús George Balma, Capitán Severino Mejía, Capitán Mario del Cid, Capitán Luis Quiel (Jefe de los servicios de represión del narcotráfico), Capitán Nicasio Lorenzo Drake y Capitán Marcos Castillo.

Los veinte oficiales que componen el CEM, leales seguidores escogidos por el General Manuel Antonio Noriega y los fines de este nuevo organismo militar van más allá de las funciones mismas del Estado Mayor General. Podría verse en éste un nuevo escalón en la militarización de Panamá, según lo determinan sus propias funciones.

Las formas norieguistas de dominación

A partir de la revolución de 1968, Omar Torrijos estructuró una alianza de clases y la Guardia Nacional, que le permitió equilibrar intereses de las fuerzas sociales y, a la vez, lograr realizaciones positivas como el Código de Trabajo y la Caja de Seguridad Social, a la vez que estimuló un Centro Financiero Internacional que creó una nueva fracción de clase: la financiera, que ahora ha demostrado su capacidad hegemónica. Esta gran alianza permitió la unidad social que enfrentó USA en la devolución del Canal de Panamá y consecuentemente, el logro del tratado Torrijos-Carter.

A partir de esa época se organizó el Partido Revolucionario Democrático (PRD), con representantes de todas las clases sociales. Esta

alianza y el partido lo heredaron Paredes y Noriega, pero que este último la llegó a perder debido al fraude electoral realizado en 1984, con la llamada UNADE (Unión Nacional Democrática), que fue una coalición partidaria electoral.

Desde entonces comenzaron los problemas políticos de Noriega. La eliminación de Ricardo de la Espriella como Presidente de la República, le enajenó al Comandante de las Fuerzas Armadas el apoyo de la fracción financiera y con ella gran parte de la élite de poder que fue partidaria de Torrijos.

El asesinato del periodista y diputado opositor Hugo Espadafora, así como otros crímenes de la misma naturaleza, crearon un clima de crisis política que afloró después de las acusaciones a Noriega hechas por su Jefe de Estado, Mayor Coronel Díaz Herrera. Como corolario, en el mes de junio de 1987, se inicia el movimiento de la Cruzada Civilista Nacional (CCN) que exige la renuncia de Noriega, después el Presidente Del Valle intenta destituir a Noriega y es obligado a esconderse sin renunciar a su cargo, como consecuencia, gran sector de la población salió a la calle a protestar y armar barricadas callejeras, en un esfuerzo por derrocar al gobierno de Noriega y de Luis Solís Palma que ha reemplazado a Del Valle. La presión del bloqueo económico que impone en 1987 el gobierno norteamericano ha contribuido a la crisis política, que se convirtió también en económica.

Bajo tales presiones, Noriega responde con represión metódica: 1) realiza una coerción selectiva dirigida a los líderes del movimiento de

oposición, a quienes se detiene preventivamente, con ánimo de desmoralizar a los seguidores, 2) se usa la fuerza policiaca conocida por el pueblo como los "doberman", por su ferocidad y falta de escrúpulos, 3) salen a reprimir los llamados "pitufos", que son otra forma de policía que usan métodos violentos de represión, 4) se emplean organizaciones paramilitares de la sección G-2 del Estado Mayor de las FDD y el llamado Batallón 2000. El PRD ha movilizado turbas de afiliados que contribuyen a romper las manifestaciones callejeras de la oposición. 5) Todas estas fuerzas practican allanamientos sin orden judicial, 6) en concierto con la propaganda oficial sobre una posible invasión norteamericana, se han organizado los batallones "Dignidad" y "Soberanía", supuestamente con reclutas voluntarios, pero en realidad no es ésta sino una forma solapada de reclutamiento obligatorio.

El sistema de represión no ha tenido límites y se orquesta la clausura de los medios de comunicación no oficiales, como el Canal 5 de Televisión, el diario La Prensa, el periódico El Siglo y la Radio Universal. El pueblo panameño está restringido a leer La Crítica y La República, que son manejados desde la presidencia por Nil Castro y sus consejeros cubanos, así como el Canal de televisión 2 y, en última instancia, La Estrella de Panamá, que no tiene una orientación definida y llamada por eso popularmente, "la ramera".

Estas formas de coerción manejadas con sentido de totalidad, constituyen un medio de represión muy efectivo, antidemocrático y en viola-

ción evidente de los derechos humanos.

Las fuerzas políticas

La base política que sostiene al General Manuel Antonio Noriega no ha cambiado desde que se inició la crisis política en junio de 1987. Continúan firmes los tres pilares de sostén: 1) los partidos políticos que actúan bajo la sombrilla de la UNADE (Unión Nacional Democrática), a la cabeza de la cual está el Partido Revolucionario Democrático, fundado por Torrijos (PRD), 2) las centrales obreras ligadas a los partidos de UNADE, todas bajo la denominación general de CONATO (Coordinadora Nacional del Trabajo) y, 3) las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP), que están todavía bajo el control no disputado de Noriega y, aparentemente, con mejor control después de la organización del Consejo Estratégico Militar (CEM), que se perfila como vanguardia del proyecto político de las fuerzas armadas. Se suma a ese potencial político la FENASEP (Federación Nacional de Servidores Públicos), que es la clientela obligada del PRD, pero que actúan independientemente cuando se hace necesario.

Desestimar esta fuerza política ha sido un grave error cuando se trató de forzar la renuncia del Comandante de la FDP. Y claro, no se ha hablado del papel que juega el Cartel de Medellín que, de acuerdo a criterios políticos consultados, financia un gobierno que está en bancarrota y que ni siquiera tiene una guía presupuestal.

La oposición política

La oposición política que es prácticamente inorgánica ha movilizado fuerzas sociales descontentas para forzar la salida de Noriega y un cambio de gobierno. La Cruzada Civilista Nacional (CCN), vanguardia del movimiento de oposición, es heterogénea: empresarios, profesionales (especialmente médicos), técnicos, intelectuales, estudiantes universitarios, docentes y trabajadores de la salud.

Multiplicidad de pequeñas y medianas empresas que están incorporadas a la cámara de comercio, empleados bancarios y la dirección financiera del país, y por último, algunos partidos políticos que se separaron de UNADE, como el Partido de Acción Popular (PAPO) y el Partido Laborista (PALA); pero éstos, como el Partido Democracia Cristiana, no actúan necesariamente bajo la dirección de la Cruzada.

La CCN inicialmente fue organizada por exafiliados al torrijismo, como Lewis Galindo, Jaime Arias, Carlos Eleta, Aurelio Padilla, Bosco Vallarinos, Roberto Brenes, y otros. La CCN sigue una línea no violenta.

El Partido Panameñista Auténtico (PPA) que jefaba Arnulfo Arias, es más que partido, una masa amorfa seguidora del anciano líder expresidente ya fallecido. La única Federación Obrera que está en oposición es la Central Itsmeña del Trabajo (CIT), pero no acuerpa a la CCN.

Los problemas de la oposición

Esencialmente, no hay un liderazgo común ni reconocido, tampoco hay unidad en los objetivos. La CCN y el PDC que serían las fuerzas más

sobresalientes, difieren en cuanto a la práctica a seguir en caso de renunciar Noriega y el gobierno de Solís Palma. Por otra parte, la oposición política no se percata de que la renuncia de Noriega *per se*, no mueve la acción popular, que preferiría, en todo caso, un objetivo más amplio como sería la eliminación del militarismo autocrático.

Perspectivas de solución

No está muy clara una solución a corto plazo. El fracaso del movimiento de oposición, a pesar de lo vigoroso que ha sido durante todo un año, y los resultados del bloqueo económico norteamericano, ha desmoralizado a gran parte de la población y hecho a Noriega un poco más fuerte que antes. El único elemento, a la larga, de gran impacto, es el efecto del bloqueo económico en la creciente miseria del pueblo panameño. El gobierno, al final de cuentas, se mantiene con fondos que nadie determina de dónde provienen.

Situación del centro bancario internacional, según un documento del Ministerio de Planificación de Panamá

A junio de 1987, los principales rubros del Balance del Centro Bancario habían registrado incrementos que llevaban a pronosticar una firme recuperación a finales de año.

La excepción del impuesto sobre ganancias en los bancos norteamericanos generadas por operaciones externas, provocó el traslado de la cartera de préstamos de Panamá a los Estados Unidos, con lo cual se produjo una reducción en los saldos

de créditos. En algunos casos, bancos norteamericanos cancelaron licencias de operación. La parte internacional de las operaciones bancarias se ha venido reduciendo en los últimos años. Los Estados Unidos modificaron su legislación bancaria, para permitir la operación de una banca internacional, que no paga impuestos ni se rige por las normas de reserva de banca local. Esto ha reducido el tamaño regional bancario. Por ello, la crisis ha afectado las operaciones internacionales en Panamá.

Operaciones financieras

En las operaciones internas ha habido un retiro masivo de depósitos a partir de junio de 1987. A nivel local, dichos retiros llegaron a US\$530 millones en sólo tres meses. Hubo después una recuperación, pero la pérdida neta de recursos generó una contracción de los activos líquidos y en la cartera de préstamos. En las cuentas externas, algunos bancos determinaron reestructurar sus operaciones a nivel internacional, lo que condujo a disminuir su presencia en el Centro panameño.

Con el congelamiento de fondos del Banco Nacional en bancos estadounidenses, se interrumpió la función de compensación para todo el sistema, lo que creó incremento desmedido en la demanda de saldos monetarios por parte del público. Tratando de evitar el peligro, la Comisión Bancaria procedió al cierre de las operaciones bancarias a partir del 5 de marzo.

Durante el primer trimestre del año, la operación del Centro, medida

a *grosso modo* por medio de los saldos efectivos, disminuyó en 30% aproximadamente. Los saldos de depósitos totales disminuyeron en B.7,600 millones, por ello, la cartera de créditos disminuyó en B.4,800 millones.

Los efectos sociales de la crisis panameña

La crisis económica ha tenido efectos dramáticos en los grupos de ingresos bajos. Primero, por la reducción de ingreso general; segundo, porque la población que opera en el sector informal como otros sectores de escaso ingreso, han sido más golpeados que la población en general; y tercero, por una reducción en los servicios públicos.

Los grupos económicos que operan productos no esenciales y que realizan transacciones en efectivo, como los vendedores callejeros, ventas de billetes de lotería, cuidadores de carros, vendedores de periódicos, etcétera, han sido severamente afectados, porque no hay circulante y, a la vez, porque han crecido con nuevos participantes.

Es evidente el deterioro en los programas de protección infantil, como la ayuda a entidades y patronatos de beneficencia y a indigentes. Los comedores populares han sido clausurados, por falta de fondos. Caritas y la Cruz Roja prestan ayuda con 70 comedores populares en áreas críticas y se atiende a 55,000 personas.

Particularmente alarmante es el agotamiento de ciertos productos esenciales y materia prima, como la gasolina, El uso de dólares para importación significa el riesgo de con-

fiscación. El transporte urbano y extraurbano ha sufrido gran merma. Los hoteles funcionan del 10% al 15% de su capacidad. Los programas de salud están siendo afectados en un 60%, así como los programas materno infantil y el de inmunizaciones. La construcción de vivienda está paralizada. Se agudizan los problemas de invasiones. Hubo un retraso de tres meses en el inicio de clases en las escuelas y se espera incremento en la tasa de deserción por problemas familiares. La educación privada, pagada, afronta retiro de estudiantes.

Se han suspendido las becas y licencias de estudiantes en el exterior.

Los mecanismos de ajuste que la gente genera se identifican en hueritos caseros y comunitarios, retorno al interior del país, cambio en el régimen alimentario y la búsqueda de nuevas actividades, aun cuando no sean muy lucrativas.

Efectos de la crisis sobre el empleo

La situación del empleo se está afectando en diversas formas. La construcción, la industria y comercio de materiales de construcción, el comercio de bienes duraderos y la banca, están despidiendo personal o cerrando operaciones. En otros sectores, se recurre a disminuir las horas de trabajo y/o la compensación al trabajador, incluyendo el sector informal que aumenta en número, pero con ingresos mucho más bajos. Han salido funcionarios bancarios de alto nivel y también otros trabajadores extranjeros de firmas internacionales. La crisis, pues, afecta muy

de cerca a los asalariados.

El sector de servicios domésticos (domésticas, choferes, jardineros) está severamente afectado, porque no se puede pagar en efectivo.

Aún cuando se encontrara una solución a la crisis, se estima que la economía se vería afectada en un 15% o sea una pérdida de 82,000 empleos. De estos, probablemente el 50% se insertaría en el sector informal. De allí que el desempleo abierto sería de 16.8%. Si no se llega a un acuerdo nacional, el grado de deterioro alcanzaría el 18.4% de la fuerza de trabajo y se estima que el sector moderno de la economía sufriría un paro de unos 100,000 asalariados. De estos, tal vez un 50% encontrarían actividades menos productivas en el sector informal. En resumen, la crisis hará fluctuar el desempleo entre el 16.8% y 18.4% de la fuerza de trabajo, esto, en contraposición al 11.6% estimado si no se hubiera dado la crisis.

Intermediación y negociación en Panama

Varias formas de intermediación y negociación se han ofrecido en Panamá para resolver la crisis política que se viene dando desde hace ya un año y su corolario económico, que ha dejado al país casi postrado.

Las mediaciones se han ofrecido desde personalidades políticas panameñas hasta la Jerarquía Católica, y en el plano internacional se ha manifestado la oferta del Presidente de Guatemala, Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo, así como la oferta de los expresidentes Carlos Andrés Pérez de Venezuela y Daniel Oduber de Costa Rica.

También la negociación propuesta por el gobierno del Presidente Reagan en un sesgo de su política de presión económica, lo que parecía oportunidad para finiquitar la cuestión panameña.

En todos los casos el gobierno de Panamá, y más específicamente el Comandante de las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP), ha rechazado las propuestas bajo excusas diversas. Es notorio el hecho de que después de cada oferta de intermediación el gobierno responde con alguna campaña de desprestigio en contra de los supuestos intermediadores.

De noviembre del año 1987 ha habido conversaciones exploratorias entre el gobierno y políticos panameños. Los resultados han sido nulos y, curiosamente, el aparato de propaganda del gobierno atacó a quienes intervinieron, con los epítetos más variados. La mediación de la Jerarquía Católica, que según el Arzobispo McGrath fue aceptada por el General Noriega, no llegó a materializarse.

El Comité Ecuménico Cristiano, en representación de las iglesias Bautista, Metodista, Episcopal, Católica y Luterana, en un comunicado conjunto, avaló la intermediación del Arzobispo de Panamá y planteó tres cuestiones básicas, a saber: "1) que al diálogo se incorporen sectores populares; 2) que se encuentre un punto de confluencia entre los grupos que dialogan en la mediación y las organizaciones populares; y 3) que en la reconstrucción del país, se tengan en cuenta los valores de la soberanía y la autodeterminación, sin presiones internas o externas".

El Obispo Bowen, auxiliar en la Arquidiócesis, informó a la ciudadanía que:

- 1) Se ha mantenido contactos esporádicos con el gobierno y la oposición;
- 2) Se ha insistido en la presencia de militares de alto rango, sin resultado alguno; y
- 3) Se ha buscado el contacto directo con el General Noriega, sin resultado alguno.

A partir de la posible mediación del Arzobispo McGrath, se desató una campaña oficial de ataque en contra de este prelado por medio de la radio, la televisión y la prensa, lo que convenció a la Jerarquía del evidente rechazo a la mediación.

A la oferta del Presidente Cerezo de Guatemala, la prensa controlada por el Gobierno, señaló que no podía aceptarse mediación de gobiernos que permiten violación constante de los derechos humanos y no dan explicación de las numerosas muertes de ciudadanos guatemaltecos. O sea que, como en el caso del Arzobispo McGrath, el aparato de propaganda del Gobierno dio la respuesta negativa.

La mediación de los expresidentes Pérez y Oduber, fue directa y personalmente ofrecida al General Noriega. En este caso, el gobierno no ofreció opinión, pero fue la oposición política la que hizo el rechazo bajo el supuesto de que los dos expresidentes fueron cómplices de Torrijos y de Noriega y que, en todo caso, preferirían la intermediación de presidentes latinoamericanos en actual ejercicio. En resumen, las intermediaciones propuestas no han tenido resultados positivos.

La negociación entre representantes del Gobierno de los Estados Unidos y de Panamá, se prolongó más de un mes, abril a mayo del corriente año y, finalmente, sin ninguna explicación pública, se rompieron las conversaciones. En círculos políticos se especula que un arreglo con el Gobierno de Estados Unidos, fue aceptado por oficiales de alto rango del Estado Mayor de las FDP, pero la oposición vino del recién creado Consejo Estratégico Militar (CEM), porque la negociación llevaba implícita el retiro del General Noriega, y no hubo acuerdo entre los oficiales de bajo rango en cuanto al reemplazo del Comandante de las FDP.

Las negociaciones con Estados Unidos se ventilaban por parte del Gobierno panameño por el Dr. Rómulo Escobar Bethancourt, ex-rector de la Universidad de Panamá, conocido por su tendencia marxista y participante en los convenios que llevaron al tratado Torrijos-Carter.

Se especula por otra parte, que el General Noriega tiene serios compromisos con oficiales de alto rango involucrados en operaciones ilícitas, y esto parece ser un obstáculo para el logro positivo de cualquier intermediación, en tanto que no se arregle la situación personal de esos oficiales en las FDP.

MEXICO

Tradicionalmente, la política exterior mexicana se ha movido en un campo defensivo por imperativo de su desarrollo político históricamente determinado. Desde los primeros años de su independencia, hubo de

enfrentar el expansionismo europeo y el norteamericano. Carlos Salinas de Gortari lo pone en estos términos: "México se levanta de un Siglo XIX en que sufrió tres invasiones, perdió la mitad de su territorio, vio como apenas cinco decenas de sus gobernantes terminaron su mandato; debió sobreponerse a una economía arruinada y al peligro supremo de ver extinguida su nacionalidad... El Siglo XX se abre con una revolución moderna ... el gobierno revolucionario se empeñaba, antes que nada, en asegurar la inviolabilidad territorial, empeño de ayer, de hoy y de siempre, y obtener reconocimiento diplomático... El pueblo mexicano ha conocido la violencia y la agresión". (Salinas de Gortari, en el acto de instalación de la Comisión de Asuntos Internacionales. Cuatro Ciénagas, Coahuila. Febrero de 1988).

Este será el condicionamiento histórico que guía el comportamiento mexicano en el concierto internacional y allí se encuentra también la raíz de su empeño en vigorizar consistentemente la soberanía como principio básico de supervivencia, como un fundamento de la convivencia entre las naciones y la libre determinación los pueblos. De aquí la prédica sobre el imperio del derecho como único sostén de la independencia y del poder soberano de los estados, que México repite desde sus inicios como república hasta los tiempos modernos como la máxima preocupación de los estadistas mexicanos. Salinas de Gortari en el discurso ya señalado, fiel a esa experiencia histórica, pone en primer lugar la soberanía entre los cuatro

grandes retos que, según él cree, enfrenta el proyecto nacional mexicano, seguido de la democracia, el económico y el social.

A la par de la soberanía, que en el contexto de la política doméstica es a la vez como un adhesivo social mexicano, se estimula y se hace prominente el nacionalismo, definido como "el valor fundamental de la esencia mexicana y el nervio que nos ha impulsado desde el origen; representa la voluntad de constituirnos en estado soberano, es, a la vez, punto de partida y paraje de llegada. Sin el nacionalismo, perderían sentido original el resto de nuestros valores... La historia también nos ha hecho nacionalistas, por necesidad vital, frente a agresiones y ambiciones externas", (Carlos Salinas de Gortari, 1988).

La dicotomía del nacionalismo definido en tales términos, y la soberanía como "forma acabada de la libertad de la nación", son y han sido, los elementos componentes de la energía promotora de una política exterior de suyo defensiva, intérprete de la lucha permanente de México frente a la agresión histórica y potencial de su libertad y supervivencia.

Quizás sea Ricardo Valero el que mejor resume todo esto cuando escribe: "Serían más tarde las guerras impuestas a México por el afán expansionista en el transcurso del siglo pasado, las que vendrían a enriquecer y reafirmar su vocación internacional por su orden de derecho. Fue por demás claro para nuestro país, después de esos acontecimientos, que sólo en la consolidación de un régimen internacional de tales características podría garantizarse

nuestra independencia política y soberanía territorial... Como la vida misma, la política exterior proyecta hacia el mundo la esencia de México. Los valores de nuestra nación han sido —y no podría ser de otra forma— la condición de nuestra nacionalidad". (Ricardo Valero, 1986).

Presencia mexicana en América Central

En el contexto de la política exterior antes apuntada, México no ha tenido ni creado una política específica para el área subregional, congruente con su vecindad geográfica. El resultado es un vacío de objetivos y participación. Más bien, la conducta mexicana se ha definido dentro de un pragmatismo conveniente que le ha permitido salir al paso de problemas coyunturales en el transcurso de sus relaciones con los países de Centroamérica, tomados individualmente.

Este comportamiento encuentra su explicación en el tácito reconocimiento mexicano de la validez de los intereses norteamericanos en el istmo centroamericano y, por consiguiente, la vigencia del concepto aceptado de una zona de influencia de los Estados Unidos en esta área. En algún sentido, lo reconoce así el Canciller Bernardo Sepúlveda Amor, cuando dice: "México no ignora que actualmente el conflicto centroamericano tiene implicaciones geopolíticas que se refieren a concepciones sobre zonas de influencia y equilibrios estratégicos". (Sepúlveda, México y Centro América, 1986). Diría que ese reconocimiento acorde con la actual coyuntura, ha sido siempre el criterio de los responsa-

bles de la política exterior de México, conscientes, tal vez, de que cualquier pretensión mexicana en América Central debe tener presente esa realidad, ya que de otra manera, se estaría México orillando a provocar un conflicto de intereses con su vecino del norte, que no sería de ningún beneficio para los fines mexicanos.

A pesar de todo, la presencia mexicana en Centroamérica se ha venido experimentado a despecho de la oposición de los Estados Unidos, pero se ha condicionado en el contexto de una acción concertada multinacional, en la cual se ha dejado ver con alguna claridad los propósitos mexicanos disfrazados en las decisiones de grupo. A partir de este presupuesto se pueden establecer tres etapas en la política de México hacia Centro América en la última década. En primer término, el comportamiento que se da a partir de 1978 a 1982 en el cual el Presidente José López Portillo asociado con el Presidente de la Internacional Socialista, Willy Brandt y el Presidente Carlos Andrés Pérez, en la llamada Cooperación de Partidos Políticos para América Latina (COPAL), brindó su apoyo abiertamente al proyecto político nicaragüense, después de la revolución de julio de 1979, al extremo de hacerse portaestandar de la bandera sandinista durante una ceremonia política celebrada en Managua en el año de 1980. Fue una expresión simbólica que a la par de la declaración conjunta con el Presidente de Francia, Francois Mitterrand, definió su oposición a la política de Estados Unidos en Centroamérica. En esta etapa, México sigue

una política de apoyo a la izquierda institucional, fue como un salto sobre la tradicional política mexicana de no intervención en las cuestiones de América Central.

En otra etapa de la política, a partir del año 1983, México forma parte del Grupo de Contadora con Venezuela, Colombia y Panamá, que fue organizado con la pretensión de lograr la paz y la estabilidad política en Centroamérica. Esta es una etapa de intermediación. México, en Contadora, hace evidente su respaldo a la Revolución nicaragüense y no oculta su disgusto de los gobiernos de Honduras y El Salvador por su franco alineamiento a la política de los Estados Unidos. Fiel a esa posición, y a despecho de su papel en Contadora, México promueve en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, una resolución condenatoria en contra de el Gobierno de El Salvador, por violación de los derechos humanos. En el artículo ya citado, Sepúlveda Amor se manifiesta con respecto a la política salvadoreña y hondureña, cuando dice refiriéndose a los logros de Contadora: "A lo largo de 33 meses, se ha avanzado positivamente en ese sentido (el esfuerzo de Contadora), aun cuando en incontables oportunidades las negociaciones se han visto obstaculizadas por provocaciones e intransigencias de algunos de los directamente involucrados, o por ingerencias externas, que no resuelven sino agudizan los conflictos políticos regionales y los internos de los países centroamericanos".

La emergencia del Grupo de Apoyo a las gestiones de Contadora (Brasil, Perú, Uruguay y Argentina),

ha ampliado el campo de maniobra mexicano, rebasando su propio compromiso en Centro América, pero sin perder de vista el objetivo primordial definido en términos de mediación en esta área político geográfica.

El Gobierno de Miguel de la Madrid encontró parámetros específicamente establecidos por la administración de López Portillo en cuanto al comportamiento mexicano en el seno de Contadora, el Grupo de Apoyo y la confluencia de ambos en el llamado Grupo de los Ocho. Pero puede apreciarse que el presente régimen mexicano no ofrece a la revolución nicaragüense el grado de apoyo que le diera la administración anterior. En ese sentido, decía uno de nuestros entrevistados en México, que este gobierno perdió la orientación "política, política" para perderse en una maraña de conceptualización financiera. Lo que quiso decir, sin duda, es que las preocupaciones mexicanas por la propia situación económica y financiera, ha tomado precedencia sobre otras cuestiones y, en particular, por la urgencia de ofrecer una imagen positiva ante el pueblo de México frente a las elecciones presidenciales de este año.

No obstante esa importante variante, se dice que el Canciller Sepúlveda queda como abanderado de la política de López Portillo y así puede entenderse cuando dice, en el artículo ya citado: "Por ello (se refiere a las condiciones del subdesarrollo de los países de Centro América), las transformaciones sociales y la consecuente modificación del *status quo*, en uno o varios países, no debería ser interpretado, necesariamente,

como elemento que pone en peligro la convivencia regional, ni a amenazar, por sí mismas, el equilibrio mundial del poder".

Los tropiezos recientes en Centroamérica

No obstante el camino tomado por México de implementar una política de mediación en Centroamérica a través de grupos multinacionales, el esfuerzo practicado ha encontrado recientemente algunos tropiezos que no pueden determinarse en cuanto a sus consecuencias futuras. Aquí puede definirse una tercera etapa que se interpreta como el retiro de México de la mediación y la ausencia de una política hacia Centroamérica.

Estos tropiezos se han encadenado a partir de la reunión cumbre de los presidentes del área los días 15 y 16 de enero de 1988 en Alajuela, Costa Rica, ocasión en que la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento, como instrumento de comprobación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Esquipulas II, presentó su informe de verificación a los mandatarios centroamericanos. El informe, acusado de parcialidad hacia Nicaragua, fue rechazado por los gobiernos de Honduras y El Salvador y, como una consecuencia inmediata, los presidentes acordaron que la Comisión de Verificación y Seguimiento, quedaría a cargo de los cancilleres centroamericanos. Con esto, de una sola plumada se eliminó a la CIVS y con ello la interposición mexicana en el proceso de paz en América Central. A esto, valdría agregar que todo el desarrollo de apro-

bación del Plan Arias que desembocó en el acuerdo de Esquipulas II, ya había debilitado o inhabilitado la participación de Contadora.

Posteriormente, siempre en el mes de enero, el Ministro de la Defensa Nacional de Honduras, General Humberto Regalado, criticó la conducta del Embajador de México en aquel país, y luego el Gobierno de Azcona pidió su retiro. El Canciller Acevedo, del Gobierno de Duarte, por su parte, envió una nota diplomática al Secretario del Exterior de México, Sepúlveda, expresando su preocupación y descontento por la complacencia mexicana a las actividades de los guerrilleros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en territorio mexicano. La Cancillería de México respondió agriamente al gobierno salvadoreño, pero el daño a las relaciones entre los dos países, ya estaba hecho.

En cuanto a Guatemala, aparentemente ha habido algunos roces que podrían haberse aclarado durante la reunión de De la Madrid y Cerezo Arévalo en Cancún, México, el día 25 de marzo del año que corre. De acuerdo a una información publicada por el diario La Jornada, proveniente del IPS, es decir de un diario reconocido por su eficiente información, "un asesor diplomático próximo a la Cancillería mexicana", expresó que "para México ha sido una desagradable sorpresa que el Presidente Cerezo está abandonando su tradicional línea de neutralidad en política exterior y se ha trasladado al bando de los interesados en anular y erradicar a Contadora de su gestión histórica. Nuestro más próximo hermano ha vulnerado las normas

mínimas de lealtad entre vecinos", sostuvo la fuente. Más adelante, la información dice: "El primer roce (según cita la prensa mexicana), surgió a raíz de un supuesto documento atribuido a Guatemala y propuesto por Cerezo en enero pasado a sus colegas de Centroamérica, donde exigía la no intervención en los asuntos del área, de México, Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba. El gobierno guatemalteco desmintió esa versión, pero en la Cancillería mexicana, al parecer, tienen una copia de ese documento".

Como se ve, después de la reunión presidencial de Alajuela, Costa Rica, los días 15 y 16 de enero pasado, la posición mexicana en América Central ha entrado en una especie de crisis, a pesar de que la reunión de Cancún podría haber restablecido la cordialidad entre el gobierno de De La Madrid y es evidente que se ha destacado un nuevo líder de gran convocatoria política, Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, que sigue siendo un héroe nacional por su gestión presidencial y, sobre todo, por la nacionalización del petróleo.

La presencia de la izquierda puede influir en Gortari para estructurar y orientar la política exterior. Queda por ver su apoyo a los grupos de izquierda latinoamericana radicados en México.

Resumen de la política exterior de México

Podríamos resumir diciendo que si bien la política exterior mexicana se ha caracterizado como defensiva en función de las presiones a que ha sido sometida tradicionalmente, es posible que en el futuro sea mayor-

mente ofensiva, o para usar el término de Salinas de Gortari, "activa".

En cuanto a Centroamérica, la política de México se ha caracterizado en la última década por manifestarse a través del velo de los grupos multinacionales seguramente para evadir una confrontación directa con Estados Unidos. Sin embargo, esta política, al final de cuentas, no ha sido todo lo positivo que desearon los gobiernos mexicanos y los escollos encontrados en sus relaciones con Honduras y El Salvador, han sido factores de interrupción en la continuidad de la política mexicana.

Se hace evidente que México debe reacomodar su política exterior hacia Centroamérica y buscar en la intervención de Estados Unidos, la causa de ese deterioro que, naturalmente, puede ser temporal. En todo caso, el acercamiento a Guatemala, dada la intención del gobierno de Cerezo de mantenerse equidistante (hasta donde esto es posible) de los conflictos parciales que afligen a América Central (parciales, en función del conflicto que se da por efecto de fronteras comunes), el acercamiento, decíamos, es el camino más efectivo que la lógica política le ofrece a México.

De todas maneras, una política de ejercicio global, con objetivos bien definidos en el interés mexicano, concebidos a largo plazo, todavía tiene que tener presente la realidad política que ofrece la presencia norteamericana en una zona que considera como flanco estratégico geopolítico. El abandono del pragmatismo político aplicado en Centroamérica, sólo es una perspectiva a la

que Salinas de Gortari podría encontrar una respuesta.

CENTRAL AMERICA, PANAMA AND MEXICO July-August, 1988

SUMMARY

The Central American political mobility harmonizes with the changes that have taken place within the political governmental systems since 1979 and with the process that has begun in each country. Undoubtedly, in many ways, events in one country, influence the other countries in this subregion. In view of this reality, the situation in each country has been examined and, the contents of the following study are herein summarized for quick reading.

In Guatemala, the government is the epicenter of multiple actions from all sectors of the opposition: popular organizations, political parties and private enterprise.

This may be explained as a consequence of the political leap the country has taken since 1986, which contradicts the rigidity of the social and economical structures that remain unchanged. Within this framework, in Guatemala, one must not overlook the administrative centralization, which prevents making changes more flexible, evidencing the application of a peculiar pragmatism that translates into trying to solve problems as they surface, without sticking to a program or platform of social and economic achievements.

The government has maintained the process of active neutrality in the Central American conflict, but evidently it is not a policy that satisfies some of the governments of this subregion. Nevertheless, as a behavioural policy within the Central American context, it has provided the Guatemalan government with certain agility in its actions.

Even though the Esquipulas II accords have been formally complied with, the Guatemalan government has not taken a serious approach to the National Revolutionary Union of Guatemala (NRUOG), the political arm of the Guatemalan guerrilla-force, active for nearly twenty seven years; to seek a cease-fire and schedule talks to settle this unending armed confrontation.

In the various analyses carried out by ASIES on politics in Central America,

the thesis has developed that all the events in the area gravitate around Nicaragua as its center.

This assumption is confirmed by the fact that the intensity of the conflict was only diminished by the efforts to find a solution to the problem with the "contras", although any increase in antagonism with the U.S. may turn the most positive outcome of the Sapoá and Managua talks into a complete failure.

Neither one of the parties involved can be blamed for not accomplishing their goals in the Sapoá peace intent; some positions have irreconcilable differences. There are sixteen opposing issues, but those causing the most friction are:

1. The demand by the Government of an immediate and final cease-fire as well as reincorporation of the rebels to the country's civilian and political life. The resistance calls for a previous *modus operandi* of the cease-fire.
2. The concept of democratization does not seem to have a common interpretation.

While the resistance demands a constitutional reform of seventeen items and the separation of the trilogy Government-Party-Army, the government disregarding such a petition, offers full civil and political guarantees under the umbrella of a comprehensive amnesty.

Other differences refer to the cease-fire process and the control of enclaves: operation, security and power of jurisdiction. Within the framework of the complex Central American situation, events happen at an extraordinary pace in other countries as well, like in El Salvador.

In fact, the possibility of President Duarte losing control of the government; internal problems in the Christian Democratic Party; the participation of leftists as an internal political front; an apparent transformation of the Army's viewpoint of the country and the war they have been fighting for years; contradicting criteria over a National Debate called for by the Archbishop of San Salvador and movements taking place within the political parties; undoubtedly influence the regional peace-process, although the Salvadorean Government has repeatedly stated that they will support any efforts leading to peace in the area, through negotiation, under the agreements of Esquipulas II.

In Honduras, compliance with the Agreements of Esquipulas II has not been accomplished as the issue of non-use of their territory against other States has not been resolved due to the existence of North American military bases on the Atlantic Coast and the presence of Nicaraguan "contras" in Honduran territory. A solution to these problems is not foreseen and the Nicaraguan proposal of an international peace-keeping force at the border between the two countries, although well received, is subject to Nicaragua dropping charges against Honduras for aiding the "contras", at the International Court of Justice.

In Costa Rica, ratification of the Central American Parliament is stagnant, as the two majority parties in the Legislative Assembly reject an election for

Parliament so close to the presidential elections of 1989, although at a recent regional meeting, they publicly stated their willingness to do so.

Finally, it is necessary to comment on the situation in Panama and on Mexican policy towards Central America.

With the creation of the Military Strategic Council, Panama is facing a new stage of military presence, and the possibility of a new form of domination under the command of General Noriega. With this scheme, a refined system of repression has developed, enabling the present government to consolidate its position and control any opposition. To all this, we must add the support of political parties acting under UNADE^{1/}, of labor unions, of CONATO^{2/} and of Panamá's Defense Forces.

Political opposition lacks leadership and is practically impotent. Likewise, all proposals for mediation to solve the differences between the U.S. and Panama have failed and the Panamanian problem rises as an additional factor of destabilization in the area.

The trend observed in the financial system is of further deterioration. The main effect of the banking crisis has been a halt in financial intermediation.

The damage caused by the political crisis and the North American boycott have had a serious impact on the quality of life of the population. Unemployment, underemployment and a surge of the informal sector are evidence of the extreme poverty, driving the Panamanian people to a state of despair.

In analyzing Mexican foreign policy towards Central America one must reflect on the Mexican tendency to seek a form of collective influence in Central America, rather than engage in their own policies to compete with the influential position of the U.S.A. in the area. This also explains Mexico's concern in keeping the Contadora Group^{3/} alive and encouraging actions by the Group of the Eight^{4/} regarding the Central American problem.

In any event, the President-elect of Mexico, Salinas de Gortari, expressed his intentions of emphasizing relations with Central America especially with Guatemala, but he must choose between the policy of supporting the leftists, implemented from 1978 to 1983; the policy of mediation which began in 1983 under the auspices of Contadora; or as a last resort, continue with the latest policy of doing nothing, implemented after the dissolution of the Verification and Follow-Up Commission on January 16 of this year in Alajuela, Costa Rica.

1/ UNADE: Union Nacional Democrática

2/ CONATO: Coordinadora Nacional de Trabajadores

3/ Contadora Group: Mexico, Venezuela, Panama and Colombia

4/ Group of the Eight: Mexico, Venezuela, Panama, Colombia, Peru, Brasil, Argentina and Uruguay



Asociación de Investigación y
Estudios Sociales (ASIES)
Guatemala.

Surgida en 1979 y fundada en 1982, es una entidad de carácter privado, de servicio, cultural y no lucrativa, formada por personas interesadas en la reflexión, análisis e investigación científica de la realidad nacional, con el objeto de estimular el interés general para la búsqueda y realización de soluciones concretas a la problemática atinente al país inspirada en el principio de la participación ciudadana.

ASIES, es una entidad con personalidad jurídica reconocida en Acuerdo Gubernativo número 608-88, del 2 de agosto de 1988.

FINES:

- Llevar a cabo investigaciones y análisis de la realidad política, económica, social y cultural del país.
- Promover el estudio, discusión y reflexión sobre los problemas nacionales y los que afectan al país en el plano internacional.
- Enriquecer las relaciones recíprocas personales y el caudal de conocimientos científicos de los asociados.

FUNCIONES:

- De foro nacional de reflexión y discusión de los fenómenos socio-políticos que conforman la problemática guatemalteca, organizando toda clase de eventos culturales públicos y privados.
- De relación, servicio y cooperación con entidades públicas y privadas de carácter cultural y científico.
- De información y formación mediante la difusión de los resultados de las investigaciones y su análisis.

The Asociación de Investigación y Estudios Sociales (**ASIES**) (Association for Social Research and Study) born in 1979 and organized as an entity in 1982, is a private service and cultural non-profit organization, established by persons interested in the analysis and scientific research of national realities, for the purpose of stimulating general interest in the search and implementation of concrete solutions to the problems which affect the country, inspired on the principle of participation of citizens.

ASIES attained its juridical personality under Government Resolution No. 608-88 on August 2, 1988.

OBJECTIVES

- To carry out research and analysis of the political, economic, social and cultural reality of the country.
- To promote the study and discussion of national problems and those which affect the country at international level.
- To improve mutual personal relations and the scientific knowledge of its associates.

FUNCTIONS

- Act as the national forum for consideration and discussion of the socio-political causes of the problems of Guatemala, by organizing all kinds of public and private cultural events.
- Relationship, service and cooperation with public and private entities of a cultural and scientific nature.
- Information and training by means of the publication of the results of its research and analysis.